



Universidad  
de Alcalá

# **BREVE INTRODUCCIÓN A LA MEMORIA HISTÓRICA EN ESPAÑA**

**BRIEF INTRODUCTION TO HISTORIAL MEMORY IN  
SPAIN**

## **Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado**

Presentado por:

D. VÍCTOR LÓPEZ MORILLAS

Dirigido por:

D. VALERIANO GARCINUÑO LIZALDE

Codirigido por:

DR. D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ GONZÁLEZ

Alcalá de Henares, a 1 de febrero de 2019

## **RESUMEN**

A lo largo del siglo XX tanto países de Europa como Latinoamérica han sufrido graves conflictos internos que han dejado huella en la historia de los mismos. La memoria histórica debe ser una parte fundamental de los actuales Estado de Derecho. En el año 2007 en España se dictó la conocida como Ley de Memoria Histórica para intentar reparar una deuda histórica con las víctimas y familiares tanto de la Guerra Civil como de la posterior represión franquista. Este trabajo se centra en el análisis, sin entrar en ninguna polémica, del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, así como de la simbología franquista a través de su máximo exponente, el Valle de los Caídos. También se incluye el análisis del principio de jurisdicción universal como elemento fundamental de la memoria histórica.

## **PALABRAS CLAVES**

Amnistía, Comisión expertos, Dignidad, Guerra Civil, Jurisdicción universal, Justicia, Legalidad, Memoria Histórica, Relator de la ONU, Recuerdo, Reparación, Represión, Simbología franquista, Valle de los Caídos, Verdad, Víctimas

## **ABSTRACT**

Throughout the twentieth century countries in both Europe and Latin America have suffered serious internal conflicts that have The so-called Law of Historic Memory was issued in Spain in 2007, in order to try and repair the historical debt the victims and their relatives of both the Civil War and the subsequent Francoist repression. This work focuses on the analysis, without going into any controversy, of the right to truth, justice and reparation, as well as of the Francoist symbolism through its maximum exponent, the Valley of the Fallen. It also includes the analysis of the principle of universal jurisdiction as a fundamental element of historic memory.

## **KEYWORDS**

Amnesty, Expert Commission, Dignity, Civil War, Universal Jurisdiction, Justice, Legality, Historic Memory, UN Rapporteur, Remembrance, Reparation, Repression, Francoist Symbolology, Valley of the Fallen, Truth, Victims

*“Un gobierno nacional o local que estuviera al servicio directo de la opinión pública tendría efectos deplorables. Es responsabilidad del Estado defender el largo plazo contra el corto plazo, como lo es defender la memoria colectiva, proteger a las minorías o alentar la creación cultural, aun cuando ésta no corresponda a las demandas del gran público”.*

Alain Touraine

En primer lugar, agradecer todo el apoyo a mis padres porque sé que no ha sido fácil aguantarme durante la elaboración de este trabajo. También a mi hermano Andrés y a Andreea, que, aunque no sea mi hermana la aprecio como tal, por todo el apoyo y ayuda porque, aunque estén lejos siempre les tengo muy presentes.

Gracias también a todo el equipo de Gómez González Abogados, en especial a Valeriano y a David, por la confianza, el apoyo, la tolerancia y el respeto desde la discrepancia ideológica en la elaboración de este trabajo.

No puedo olvidarme de darle las gracias a Ángel, Fernando, Miguel, Iris, Laura, Víctor por su apoyo constante; a Marcos por todas esas conversaciones en las que desde la discrepancia siempre encontrábamos un punto en común y una enseñanza; a Ana por el apoyo y por ser la mejor compañera que he podido tener; a Lucía por su apoyo y por entender mi situación mejor que nadie y siempre encontrar las palabras perfectas en los momentos malos y a Teresa, simplemente por estar ahí siempre.

Este trabajo pretende ser un homenaje a todas aquellas víctimas que dieron su vida por la legalidad y la libertad, la Guerra Civil enfrentó familias por el simple hecho de vivir en una zona determinada y todas las víctimas merecen que se les respete y se les recuerde.

También agradecer a todas aquellas asociaciones, organizaciones que luchan por mantener en el recuerdo y dignificar a las víctimas de la Guerra Civil.

## **ÍNDICE**

<b>I. INTRODUCCIÓN</b>	<b>5</b>
<b>II. EL DERECHO A LA VERDAD, A LA JUSTICIA, A LA REPARACIÓN COMO INSTRUMENTOS DE LA MEMORIA HISTÓRICA EN ESPAÑA</b>	<b>9</b>
1. El derecho a la verdad como instrumento de memoria histórica	10
2. El derecho a la justicia como instrumento de memoria histórica.	14
3. El derecho a la reparación como instrumento de memoria histórica.	18
<b>III. EL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN UNIVERSAL COMO PARTE FUNDAMENTAL EN LOS PROCESOS DE MEMORIA HISTÓRICA.</b>	<b>22</b>
1. Concepto y aspectos generales	22
2. Jurisdicción Universal en España	27
3. La querella argentina contra los crímenes del franquismo	32
<b>IV. LA SIMBOLOGÍA FRANQUISTA EN ESPAÑA</b>	<b>36</b>
1. Regulación y aspectos básicos.	36
2. El Valle de los Caídos	38
A) Régimen jurídico	38
B) Comisión Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos	39
<b>IV. CONCLUSIONES</b>	<b>45</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA</b>	<b>48</b>
<b>ANEXO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL</b>	<b>51</b>

## I. INTRODUCCIÓN

Para adentrarnos en la memoria histórica de España, necesitamos conocer los hechos que motivan la promulgación de la ley 52/2007, del 26 de diciembre, popularmente conocida como Ley de Memoria Histórica. Estos hechos referidos son la guerra civil española y la represión acontecida durante los casi cuarenta años de la dictadura franquista, surgida del bando vencedor de la contienda.

El 14 de abril de 1931, se inició en España, un periodo democrático de gran importancia, conocido como la II República. Este régimen democrático terminó de una forma violenta plasmada en una guerra civil que se inicia en julio de 1936 y finaliza oficialmente el 1 de abril de 1939.

El origen de esta terrible contienda se explica por una serie de conflictos y tensiones internas, que en muchos casos eran antigua pero que cristalizan durante el régimen de libertades que trajo la República. Los conflictos que hay que mencionar para explicar el inicio de la guerra civil son:

- El problema de la Tierra: La Ley de la Reforma Agraria que se pone en marcha durante el bienio progresista contribuye a que la República se gane el rechazo de los propietarios agrícolas y genera frustración entre los campesinos sin tierras.
- El problema del ejército: la reforma del ejército que tiene lugar durante la República, provocará el choque con una parte del mismo.
- La protesta social y el movimiento obrero: En principio los sectores populares apoyaron a la república, pero las medidas sociales de la misma fueron frenadas por la crisis económica internacional (derivada del Crack del 29) por lo que la República será abandonada por el PSOE, UGT y rechazada por CNT y los discursos de estas fuerzas se irán radicalizando.
- El problema religioso: el intento de secularización y modernización durante el periodo republicano chocara con los sectores católicos ultraconservadores, que se sintieron atacados. Por otro lado, el sector anticlerical, responderá a la actitud desafiante de la Iglesia atacando sus propiedades en determinados momentos.

Sin embargo, estos conflictos no conducen necesariamente a la guerra civil. El golpe final a la República es asestado por una conspiración de un grupo de militares entre los que

destacaban el general Emilio Mola (Navarra) y Francisco Franco (Canarias), Juan Yagüe (Melilla), Gonzalo Queipo de Llano (Sevilla), Miguel Cabanellas (Zaragoza) que habían planeado derrocar al gobierno republicano y los asesinatos del teniente Castillo y de Calvo Sotelo el 12 y 13 de julio aceleran la conspiración en forma de golpe de Estado que se inicia el 17 de julio en Marruecos y posteriormente se unen al movimiento golpista otras regiones.

El golpe miliar triunfa en la España interior, Galicia, las ciudades andaluzas de Sevilla, Córdoba o Granada y parte de Aragón y tiene apoyos de militares conservadores, monárquicos, grupos carlistas, falangistas y católicos. El golpe fracasó en las áreas industrializadas (Asturias, Madrid, País Vasco, Cataluña, Levante...) y en la periferia española, y el apoyo social de la Republica procede de clases populares: obreros, trabajadores urbanos, pequeña y mediana burguesía relacionada con el republicanismo, campesinado sin tierra y grupos de intelectuales y artistas.

El desarrollo de la guerra estuvo marcado por dos factores a tener en cuenta:

- **Las desigualdades de apoyos internacionales:** Mientras que las fuerzas del bando sublevado contaron con el apoyo militar de la Italia fascista de Mussolini y la Alemania Nazi de Hitler, la República se encontró con una respuesta tibia de las democracias occidental y solamente fue apoyada por el régimen comunista soviético y por los voluntarios de las Brigadas Internacionales).
- **Las diferencias de unidad entre los bandos:** En el bando sublevado se crea una Junta de Defensa Nacional que unifica y coordina la sublevación y la campaña y la unificación del poder militar en manos del general Franco, que además unificó a carlistas, falangistas y restos de la CEDA en el partido FET de las JONS, mientras que en el bando republicano faltaba cohesión ya que se enfrentaron dos modelos: el de CNT-FAI y POUM (“Revolución y guerra al mismo tiempo) y el de PSOE y PCE (“primero la guerra y después la revolución”), creando enfrentamientos entre ellos, como demuestran los hechos acontecidos en Barcelona en mayo de 1937.

Con estos condicionantes, la guerra se desarrolla en las siguientes **fases**:

**Primera fase (julio 1936-marzo de 1937):** Intentos de las tropas sublevadas de tomar Madrid, lo que motiva que el gobierno republicano marche a Valencia. Estos intentos fracasaron, pero los sublevados tomaron San Sebastián, Irún y Málaga.

**Segunda fase (abril-octubre de 1937):** En esta fase, el bando sublevado inicia su ofensiva en el frente del norte bajo la dirección del general Mola hasta su fallecimiento en el accidente de avión en junio de 1937. Ocurre el bombardeo de Gernika por la legión alemana cóndor y los sublevados toman Asturias, Cantabria y País Vasco.

**Tercera fase (octubre de 1937- abril de 1939):** En esta fase destaca la toma de Teruel por las fuerzas republicanas. Los sublevados recuperaron Teruel en febrero de 1938 y continúan su avance hacia el Mediterráneo ocupando Castellón y en abril de 1938, Lérida, por lo que el gobierno republicano se trasladó a Barcelona. Los republicanos iniciaron la ofensiva de la batalla del Ebro (diciembre 1938- febrero de 1939), pero se salda con victoria franquista, que continúan su avance hacia Cataluña y ocupan Barcelona en enero de 1939. A finales de marzo de 1939, el ejército sublevado entraba en Madrid y el 30 de marzo en Alicante (última ciudad republicana) finalizando la contienda el 1 de abril de forma oficial.

En el plano económico, las consecuencias fueron desastrosas: destrucción del 42% de locomotoras, destrucción de 500.000 viviendas, la producción industrial descendió un tercio y la agraria un cuarto debido las primeras por falta de materias primas y maquinaria y las segundas por falta de mano de obra. Además, disminuye el índice de renta nacional entre 1935 y 1939 un 27%<sup>1</sup>

Las consecuencias políticas están relacionadas con la desaparición un régimen democrático y el inicio un periodo de falta de libertad política y de supresión de derechos fundamentales.

Las consecuencias demográficas fueron dramáticas ya que se estima que el número de fallecimientos podría rondar entre los 500.000-600.000 personas. De estas víctimas, unas 160.000 podrían ser en combates mientras en resto podrían víctimas del hambre, bombardeos, enfermedades y ejecutados en la retaguardia de ambos bandos.

Es difícil contabilizar el número de represaliados durante el conflicto. Según el historiador británico Paul Preston, en las cifras de represaliados durante la guerra en la zona republicana se registraron minuciosamente cuando fueron conquistadas por el bando sublevado. En cambio, las zonas del bando sublevado no se registraron de forma parecida, salvo como

---

<sup>1</sup> JOVER ZAMORA, José María, *Historia de España Menéndez Pidal. República y Guerra Civil*, Ed. Espasa Libros, Madrid, 2004.

resultado de los Consejos de Guerra Sumarios. La mayoría de las muertes no se registraban y se enterraban en fosas comunes como por ejemplo en el pozo de Caudé (provincia de Teruel) con 1005 víctimas enterradas. Este historiador estima que entre los republicanos asesinados en la zona sublevada o nacional, se podrían contabilizar entre los 92.462 personas y las 130.000 personas.<sup>2</sup>

Además, de los asesinados durante la guerra, se han contabilizado unos 500.000 republicanos exiliados hacia el año 1940 entre Francia, México, Norte de África...por lo que la población española quedó reducida a 26 millones aproximadamente.

Además, tenemos que contabilizar la represión durante la dictadura. Se estima que decenas de miles de personas fueron ejecutadas hasta 1945 mediante fusilamientos. Además, hubo uno 200 campos de concentración y más de cien campos de concentración siguen existiendo hasta bien entrado el decenio de 1940, siendo el último de ellos el de Miranda del Ebro, que se cierra en 1947. Más de 400.000 prisioneros pasaron por esos campos, sufriendo torturas y fueron obligados a trabajar en diferentes obras públicas. Estos campos fueron sustituidos por Colonias Penitenciarias Militarizadas y bajo el Patronato para la Redención de Penas por Trabajo se llevó a cabo el trabajo la explotación de estos presos que podían reducir hasta un tercio de su condena. Los ejemplos de obras públicas realizadas por presos son numerosos: el canal del Guadalquivir, la reconstrucción del Alcázar de Toledo y la construcción del Valle de los Caídos, para el que se usaron 20.000 prisioneros.

Esta represión estaba legitimada por la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939, que sentaba las bases de la purga de la posguerra y por la Ley para la Supresión de la Masonería y del Comunismo de marzo 1940 que suponía una represión política y cultural y la llamada “Causa General de abril de 1940”.

Además, otros mecanismos de represión política fueron la existencia de la Brigada Político-Social y del Tribunal del Orden Público (TOP), que encarcelaban y juzgaban a opositores del régimen.

Este trabajo consta de tres capítulos en los que se analiza a modo de introducción tanto el derecho a la verdad, justicia y reparación, la jurisdicción universal de modo general, y en

---

<sup>2</sup> PRESTON, Paul, *La guerra civil española. Reacción, Revolución y Venganza*, Ed. Debolsillo, Barcelona, 2006, págs. 309-319.



particular, en España y como influye en los procesos de memoria histórica, así como un análisis de la simbología franquista en España centrándose en su regulación a nivel nacional y viendo como elemento más representativo el Valle de los Caídos.

La metodología, así como los recursos tratados se ha basado en el análisis de varios informes de Organizaciones Internacionales y nacionales, así como de una gran cantidad de sentencias de Tribunales Internacionales junto con análisis por parte de la doctrina dotando a este trabajo de un marco teórico-práctico muy equilibrado. Al tratarse de una breve introducción acerca de un tema regulado por una Ley concreta, también se han analizado diversos aspectos de dicha Ley, por lo que el análisis legislativo ha sido muy importante en la elaboración de este trabajo.

## II. DERECHO A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN COMO INSTRUMENTOS DE LA MEMORIA HISTÓRICA EN ESPAÑA

Según la ONU el término justicia de transición hace referencia a *“la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Tales mecanismos pueden ser judiciales o extrajudiciales”*<sup>3</sup>

Para JOINET<sup>4</sup> este concepto tiene tres dimensiones que son la verdad, justicia y reparación, conceptos que se explicarán a continuación.

### 1. El derecho a la verdad como instrumento de la memoria histórica.

Se puede definir el derecho a la verdad es ese derecho a obtener respuestas por parte del Estado. Dentro de este derecho hay dos fases: la colectiva y la individual<sup>5</sup>. Este derecho conlleva a su vez tener conocimiento absoluto y amplio de los hechos y actos que se produjeron, de los sujetos que los cometieron, así como quienes los sufrieron así como de las circunstancias y motivación de las violaciones ocurridas<sup>6</sup>.

Según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este derecho está vinculado al derecho al acceso a la justicia y que tanto la obligación del Estado de investigar como de juzgar sirve de elemento reparativo del derecho a la verdad. Añade que deber de tratarse de una verdad o conocimiento absoluto, es decir, que no puede ampararse en razones de interés público o seguridad nacional la falta de investigación ni la falta de juzgar estos hechos<sup>7</sup>.

---

<sup>3</sup> Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, *El Estado de Derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos*. Informe del Secretario General (UN Doc S/2004/616), 3 agosto de 2004, párr.8.

<sup>4</sup> JOINET, Louis, *Informe Final revisado acerca de la impunidad de los autores de violaciones de Derechos Humanos (civiles y políticos) de conformidad con la Resolución 1996/119 de la Subcomisión* (UN Doc E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1), 2 de octubre 1997.

<sup>5</sup> OLIVEIRA, Alicia y GUEMBE, María José (1998), “La verdad, derecho de la sociedad”, en *La aplicación de los tratados internacionales sobre derechos humanos por los tribunales locales*, Ed. Editores del Puerto, 2º edición, Argentina, 1998, pág. 549

<sup>6</sup> GÓMEZ ISA, Felipe, “El derecho de las víctimas a la reparación por violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos” en *El derecho a la memoria*, Ed. Alberdania, Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto, Bilbao, 2006, pág. 38.

<sup>7</sup> Véase: SCIDH, Caso Velásquez Rodríguez c. Honduras, 29 de julio de 1988, párr. 181, SCIDH Caso Bámaca Velásquez c. Guatemala, 25 de noviembre de 2000, párr. 201, SCIDH Caso Myrna Mack Chang c.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en su jurisprudencia establece que el derecho a la verdad histórica forma parte de la libertad de expresión. El acceso a las fuentes documentales originales y la obligación de facilitar el trabajo de las asociaciones de memoria también integran la libertad de expresión. Anima también el TEDH, a los países miembros a debatir sobre su historia de forma abierta e imparcial<sup>8</sup>.

En España, y antes de entrar en la explicación de los conceptos anteriores cabe destacar que la exposición de motivos de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura (es conocida como Ley de Memoria Histórica, LMH) establece que el sentido de esta es entre otros: dar una respuesta como Estado a las demandas ciudadanas tanto a nivel particular como a nivel de asociaciones y organizaciones que trabajan para la recuperación de la memoria histórica, honrar y recuperar a quien sufrieron agravios, injusticias, exiliados, los que perdieron la vida y todos aquellos que lucharon por la defensa de los valores democráticos.

Por tanto, esta Ley tiene una doble finalidad, por un lado, establecer políticas de Estado para el conocimiento de la historia y fomento de la memoria histórica y, por otro, reconocimiento de un derecho individual a la memoria tanto personal como familiar.

Ya dentro del texto legal, el art.2<sup>9</sup> se reconoce el derecho a la reparación y recuperación de la memoria personal y familiar al reconocer lo injusto de las condenas, sanciones, el exilio.

Como consecuencia de la Resolución 18/07 del Consejo de Derechos Humanos y tras la invitación del Gobierno español, Pablo de Greiff, Relator Especial sobre la promoción de la

---

Guatemala, 25 de noviembre de 2003, párr. 180 y CIDH caso Gomes Lund y otros c. Brasil, 24 de noviembre de 2010, párr. 202.

<sup>8</sup> Véase: STEDH Case Chauvy and others v. France, 29 September 2004, párr. 69, STEDH Case Monnet v. Switzerland, 21 September 2006, párr. 64 y STEDH Case Kenedi v. Hungary, 26 May 2009, párr. 43.

<sup>9</sup> **Art. 2 Reconocimiento general.**

*“1. Como expresión del derecho de todos los ciudadanos a la reparación moral y a la recuperación de su memoria personal y familiar, se reconoce y declara el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil, así como las sufridas por las mismas causas durante la Dictadura.*

*2. Las razones a que se refiere el apartado anterior incluyen la pertenencia, colaboración o relación con partidos políticos, sindicatos, organizaciones religiosas o militares, minorías étnicas, sociedades secretas, logias masónicas y grupos de resistencia, así como el ejercicio de conductas vinculadas con opciones culturales, lingüísticas o de orientación sexual.*

*3. Asimismo, se reconoce y declara la injusticia que supuso el exilio de muchos españoles durante la Guerra Civil y la Dictadura”.*

verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, visitó España del 21 de enero al 3 de febrero de 2014<sup>10</sup>.

Tras esta visita, el Relator elaboró un Informe la promoción de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición<sup>11</sup>, en el que analiza la situación de estos temas en España y da una serie de recomendaciones. Sobre el derecho a la verdad el Relator refleja en su informe<sup>12</sup>:

- Que existe mucha información, pero ésta se encuentra muy dispersa, sigue de distintas metodologías y necesita de verificación.
- Afirma también que no existe política de Estado para la promoción de la verdad ya que la Ley 52/2007 (LMH) no lo soluciona, a su juicio.
- Según PAYERO LÓPEZ, la LMH es insuficiente para cumplir con la obligación de los Estados de recuperar memoria e investigar ya que sólo contempla el derecho de las víctimas y familiares y no la obligación de los Estados ni ha sido eficaz su aplicación<sup>13</sup>.
- En la misma línea que este argumento GÓMEZ ISA afirma que la LMH carece de medidas *“para garantizar el derecho individual y colectivo de conocer la verdad”*<sup>14</sup>.
- No existe un censo oficial de víctimas ni datos o estimaciones del número total de víctimas en la Guerra Civil y, en la posterior, dictadura. Si bien, aunque existiera este censo, no hay previsto un mecanismo especial de esclarecimiento de la verdad, el cual, proporcionaría información y la promovería el conocimiento de los hechos, lo cual, permitiría el reconocimiento oficial de los mismos.

---

<sup>10</sup> Esta visita tenía el fin de conocer y valorar las medidas adoptadas por el Estado español en la relación con los temas del mandato en virtud de las graves violaciones de DDHH ocurridas durante la Guerra Civil y en la posterior, dictadura franquista. Durante esta visita, visitó lugares emblemáticos de memoria en diversos puntos de la geografía española (Valle de los Caídos, cementerio de Paracuellos del Jarama, Castillo de Montjuic) y se reunió con representantes del Estado y de las Comunidades Autónomas, representantes del Consejo General del Poder Judicial, Fiscal General del Estado y representantes del Ministerio de Fiscal, Defensor del Pueblo tanto nacional como alguno autonómico. Además de las reuniones institucionales, el Relator se reunió con representantes de la sociedad civil, asociaciones, organizaciones, abogados, historiadores, académicos, víctimas, Secretario General de la Conferencia Episcopal...

<sup>11</sup> GREIFF, Pablo de, Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, (UN Doc A/HCR/27/56/ Add.1), Ginebra, 2014

<sup>12</sup> *Ibidem*, párr. 43-66.

<sup>13</sup> PAYERO LÓPEZ, Lucía, “Justicia de transición en España: claves para aprobar una asignatura pendiente” en *Revista de Paz y Conflictos*, Vol. 9, núm. 1, 2016, pág. 213.

<sup>14</sup> GÓMEZ ISA, Felipe “Retos de la justicia transicional en contextos no transicionales: el caso español”, en RIPOL CARULLA, Santiago y VILLÁN DURÁN, Carlos, *Justicia de transición: el caso de España*, Barcelona, Institut Català Internacional per la Pau, Barcelona, 2012 pág. 179.

- Sería importante la creación de un órgano independiente que podría adoptar la forma de Comisión de la Verdad.
- Las Comisiones de la Verdad se puede definir como *“órganos oficiales, temporales y de constatación de hechos que no tienen carácter judicial y se ocupan de investigar abusos de los derechos humanos o el derecho humanitario que se hayan cometido a lo largo de varios años”*<sup>15</sup>
- Amnistía Internacional defiende que el trabajo de estas comisiones ayuda a que se cumpla el derecho a la verdad tanto en su vertiente individual como en la colectiva ya que ayuda a que la sociedad reciba información sobre su historia propia<sup>16</sup>.
- En lo que respecta a las Comisiones de la Verdad, la CIDH ha señalado que contribuyen a construir y preservar la memoria histórica, a esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Sus resultados no son sustitutos del deber del Estado de depurar responsabilidades ni del deber de los Tribunales internacionales. Por tanto destaca que la relación entre este deber y este órgano es de complementariedad y sirve para construir una verdad más amplia<sup>17</sup>.
- Destaca varias iniciativas autonómicas a favor de la verdad, aunque no deberían sustituir a las políticas públicas o de Estado.
- Muestra con gran preocupación que deben recogerse de manera urgente los testimonios directos de las víctimas y testigos ya que existe riesgo de perderse definitivamente por la avanzada edad de estos.

Tras este análisis el Relator da una serie de recomendaciones<sup>18</sup> las cuales son:

- Debe establecerse un mecanismo que oficialice la verdad y unifique la memoria democrática en España. Este mecanismo debe de servir para unificar los métodos y homologaciones de las investigaciones, promover la participación activa de las víctimas y sociedad civil, validación y reconocimiento de las víctimas, acceso a archivos y fondos documentales oficiales y no oficiales.

---

<sup>15</sup> Conjunto de Principios Actualizado para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad (Conjunto de Principios Actualizado para la Lucha contra la Impunidad), Adición al Informe de Diane Orentlicher, experta independiente encargada de actualizar el Conjunto de Principios para la Lucha contra la Impunidad, Doc. ONU: E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 de febrero de 2005, pág. 6.

<sup>16</sup> Verdad, justicia y Reparación: Creación de una Comisión de la verdad, Amnistía Internacional, 11 de junio de 2017 (AI: POL30/009/2007)

<sup>17</sup> SCIDH Caso Zambrano Vélez y otros c. Ecuador, 4 de julio de 2007, párr. 128

<sup>18</sup> GREIFF, Pablo de, *op.cit.*, párr. 104 g) - 104 i)

- Revisar con víctimas y asociaciones modelo actual de exhumaciones donde el Estado delega la responsabilidad en ellas. Además de asegurar la actuación de las autoridades judiciales y la correcta distribución de los recursos.
- Implemente una política estatal de acceso a los archivos, a través, por ejemplo, de una Ley de Archivos.

## 2. El derecho a la justicia como instrumento de la memoria histórica.

El derecho a la justicia no sólo es el derecho que corresponde a las víctimas sino también al conjunto de la sociedad ya que se “vió postergada” en sus derechos por la impunidad. Al igual que pasa con el derecho a la verdad no sólo es un derecho sino también un deber para el Estado<sup>19</sup>.

Esta impunidad se produce cuando el Estado falla en su obligación de investigar, perseguir, enjuiciar y, si corresponde, condenar a los responsables de las violaciones de Derechos Humanos<sup>20</sup>.

Sobre el derecho a la justicia, el Relator destaca en su informe los siguientes puntos<sup>21</sup>:

- Es el apartado con más déficits dentro del Informe.
- La Ley de Amnistía es el principal obstáculo para encausar, investigar y establecer procedimientos penales. Aunque no es el único ya que otros obstáculos<sup>22</sup> son: el principio de no retroactividad, el principio de seguridad jurídica, la aplicación de la norma más favorable, la prescripción de los delitos.
- Observa que es incompatible la Ley de Amnistía (15 de octubre de 1977) con las obligaciones internacionales que asumió España con la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (27 de abril de 1977), en concreto, con el art. 2.3<sup>23</sup> del citado Pacto.

---

<sup>19</sup> ZAZUETA CARRILLO, Laura Wendy, “El derecho a la verdad en el marco de la justicia transicional como obligación del Estado mexicano ante la impunidad” en *Revista Virtual Via Inveniendi et Iudicand*, Vol. 9, núm. 2, Universidad Santo Tomás, Bogotá, D. C., julio-diciembre 2014, pág. 25

<sup>20</sup> ARARTEKO (Defensor del Pueblo Vasco) “*Verdad, justicia y reparación para las víctimas de la dictadura franquista: Significado y políticas públicas en la Comunidad Autónoma del País Vasco*” Vitoria, enero 2012, pág. 12.

<sup>21</sup> GREIFF, Pablo de, *op.cit.*, párr. 67-84.

<sup>22</sup> El Relator señala que todos estos obstáculos entendidos de manera restrictiva

<sup>23</sup> **Art. 2.3 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos**

*Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:*

- Recuerda que en materia de desapariciones forzosas el Derecho Internacional Público establece que el plazo de prescripción comienza cuando se encuentran a las personas con vida o se encuentran sus restos.
- Recuerda que otros casos como el caso Scilingo y el caso Pinochet superaron todos los obstáculos (Amnistía chilena, aplicación de los tipos penales de Derecho Internacional Público, cuestiones relativas a la prescripción).
- No existe impedimento para anular la Ley de Amnistía y correspondería al Tribunal Constitucional su interpretación y aplicación en virtud de las normas y obligaciones internacionales de DDHH.
- Señala que la vía penal no es la adecuada ya que la finalidad de esta es imponer una sanción a un determinado sujeto pero si este es imposible de ser identificado la investigación judicial quedaría extinguida.
- No hay investigaciones ya que se archivan las causas sin conocer de los hechos invocando a la Ley de Amnistía, hecho que vulnera el derecho a la justicia y el derecho a la verdad. Sin hechos es imposible que haya responsabilidad que se pueda extinguir o suspender por tanto todos los casos requieren de investigaciones judiciales para determinar al menos si es amnistiable o no, situación que nunca se ha dado en la justicia española.

Tras este análisis el Relator da una serie de recomendaciones las cuales son<sup>24</sup>:

- Dar alternativas y dejar sin efecto las disposiciones de la Ley de Amnistía que obstaculizan las investigaciones y el acceso a la justicia de las violaciones de DDHH cometidas en la Guerra Civil y posteriormente, en el franquismo.
- Dar expresión institucional a las obligaciones internacionales en materia de derecho a la verdad, acceso a la justicia y a las garantías del debido proceso.

---

*a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;*

*b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial;*

*c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.*

<sup>24</sup> GREIFF, Pablo de, *op.cit.*, párr. 104 q) – 104 s).

- Asegurar la colaboración de la justicia española en procedimientos judiciales en el exterior y tomar medidas de fortalecimiento de la jurisdicción universal tras las diversas reformas que han provocado un debilitamiento de esta.

Acerca de la compatibilidad que tienen las leyes de amnistía con el derecho a la justicia se han pronunciado varios tribunales internacionales.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU (CDH) establece que es incompatible la amnistía con la obligación del Estado de investigar actos de torturas, desapariciones forzadas en su jurisdicción garantizando que no ocurran en esta y garantizando una reparación efectiva, es decir, indemnización completada con la rehabilitación más amplia posible<sup>25</sup>.

La CIDH considera inadmisible la amnistía, así como la prescripción al suponer la exención de responsabilidad de los que cometieron violaciones de Derechos Humanos, tales como torturas, desapariciones forzadas o ejecuciones, por contravenir derechos inderogables reconocidos en el Derecho Internacional de Derechos Humanos (DIDH)<sup>26</sup>.

El TEDH siguiendo la misma línea argumental, señala que la amnistía es incompatible con la obligación de investigar violaciones de derechos humanos como torturas, desapariciones forzadas...<sup>27</sup>

En lo relativo a la prescripción, el CDH en sus Observaciones Finales establece que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y que el Estado debe garantizar las medidas que reconozcan tal imprescriptibilidad<sup>28</sup>.

En nuestro Código Penal también nos encontramos con la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad en el art. 131.3 CP<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> CDH, Observación General núm. 20, art. 7 – Prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, (ONU: HRI/GEN/1/Rev.7), Ginebra, 1992, párr. 15.

<sup>26</sup> Véase: SCIDH Caso Barrios Altos c. Perú, 14 de marzo de 2001, párr. 41, SCIDH Caso Almonacid Arellano y otros c. Chile, 26 de septiembre de 2006, párr. 106-114.

<sup>27</sup> Decision TEDH, Case Ould Dah v. France, 17 march 2009.

<sup>28</sup> CDH, Observaciones Finales: España, 2008, (CCPR/C/ESP/CO/5), Ginebra, 2008, párr. 9.

<sup>29</sup> **art. 131.3 Código Penal,**

*“3. Los delitos de lesa humanidad y de genocidio y los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, salvo los castigados en el artículo 614, no prescribirán en ningún caso. Tampoco prescribirán los delitos de terrorismo, si hubieren causado la muerte de una persona”.*



La Constitución no es compatible con Ley de Amnistía en lo que relativo a que exime de responsabilidades a las violaciones de DDHH sufridas en la Guerra Civil y, posteriormente, en la represión franquista.

Nuestra Constitución proclama como uno de los valores de la Nación la justicia en el art. 1.1<sup>30</sup>, posteriormente, en el art.10.2<sup>31</sup> establece que los derechos que en ella se recogen hay que interpretarlos conforme a los tratos y normales internacionales en materia de Derechos Humanos. También recalcar que los Tratados pasan a ser legislación nacional si han sido ratificados en virtud del art. 96.1 CE<sup>32</sup>.

En base a lo ya visto anteriormente que señalaba el TEDH<sup>33</sup> y lo recogido en nuestra Constitución, podría suponer un argumento para declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía.

Según VALENCIA los crímenes del franquismo nunca deberían haber sido amnistiados ni en la actualidad sería posible al ser delitos graves cometidos contra el Derecho de Gentes<sup>34</sup>.

AMBOS y GIL afirman que no es posible la aplicación retroactiva del PIDCYP ya que los hechos son anteriores a su ratificación por lo que no sería posible el recurso<sup>35</sup>. Aún en el caso de que se permitiera la retroactividad, el recurso valdría con que fueran acciones civiles, si bien Señala GIL que, aunque España incumplió sus obligaciones internacionales ello no

---

<sup>30</sup> **art. 1.1 Constitución Española**

*“1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.*

<sup>31</sup> **art. 10.2 Constitución Española**

*“2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.*

<sup>32</sup> **art. 96.1 Constitución Española**

*“1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional”.*

<sup>33</sup> Ver nota a pie de página núm. 27.

<sup>34</sup> VALENCIA, Hernando, “La ley española de amnistía de 1977 en una perspectiva de justicia transicional” en RIPOL, Santiago y VILLÁN, Carlos *Justicia de transición: el caso de España*, Institut Català Internacional per la Pau, Barcelona, 2012, pág. 196.

<sup>35</sup> AMBOS, Kai, “El marco jurídico de la justicia de transición” en AMBOS, Kay, MALARINO, Ezequiel y ELSNER, Gisela (eds.) *Justicia de transición. Informes de América Latina, Alemania, Italia y España*, Fundación Konrad-Adenauer, Montevideo, 2009, pág. 115 y GIL, Alicia, *La justicia de transición en España. De la amnistía a la memoria histórica*, Atelier, Barcelona, 2009, pág.109

conllea a que la Ley de Amnistía fuera incompatible con el Derecho Internacional vigente en ese momento<sup>36</sup>.

En el Auto del Tribunal Supremo (TS) de 28 de marzo de 2012<sup>37</sup>, se analizan diversas cuestiones como el principio de legalidad e irretroactividad de la norma más favorable, la prescripción, así como la amnistía.

En lo relativo a la prescripción, el TS señala que aunque se hubiera comenzado a contar el plazo desde la entrada en vigor de la ley el plazo de prescripción sería de 20 años, por tanto estarían prescritos todos los delitos.

En lo que respecta a la amnistía destaca que es una ley vigente en la actualidad y que exime de penas impuestas o que pudieran imponerse por la comisión de los delitos.

Del principio de legalidad y de la irretroactividad de la norma más favorable son dos principios que impiden la aplicación retroactiva de disposiciones sancionadoras a hechos anteriores a su vigencia por lo que se impide definir lo sufrido por las víctimas como delitos de lesa humanidad.

### **3. El derecho a la reparación como instrumento de la memoria histórica.**

Según el ARARTEKO además de ser un elemento fundamental junto al derecho a la verdad y a la justicia *“la reparación deber ser la reacción automática al reconocimiento de la existencia de una violación de un derecho”*.<sup>38</sup>

Según el CDH existen cinco formas de reparación: restitución, indemnización, rehabilitación y medidas de satisfacción, garantías de no repetición y cambios en las leyes y en la práctica.<sup>39</sup>

La CIDH destaca que la reparación tiene que ser consecuente con la violación sufrida ya que la reparación se manifiesta de distintas formas en virtud de la lesión que se haya producido.<sup>40</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibidem*

<sup>37</sup> Auto del Tribunal Supremo(ATS), Sala de lo Penal, 1º, núm. 3009/2012, 28 de marzo de 2012

<sup>38</sup> ARARTEKO, *op.cit.*, pág. 17

<sup>39</sup> CDH, Observación General núm. 31: La índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Parte, (CCPR/C/21/Rev.1/Add.13), Ginebra, 2004, párr. 16.

<sup>40</sup> SCDIH, Caso Hermanas Serrano Cruz c. El Salvador, 1 de marzo 2005, párr. 136.

En el caso español, como ya hemos visto en apartados anteriores, el art. 2 LMH *“reconoce y declara el carácter injusto de todas las condenas, sanciones...”*. En el artículo siguiente, art. 3<sup>41</sup> LMH se produce la declaración de ilegitimidad distinguiendo el legislador si la condena, sanción o cualquier otra resolución dictada por motivos personales, políticos, creencias religiosas se produjo durante la Guerra Civil o posteriormente, en la represión franquista y reconociendo la ilegitimidad de estas dictadas por determinados Tribunales.

Según ESCUDERO ALDAY<sup>42</sup>, la ilegitimidad viene provocada porque estos Tribunales servían como mecanismo de represión política e ideológica, ya que las condenas se producían por motivos personales, políticos y religiosos, contra quienes defendían la legalidad pretendiendo el retorno a un régimen democrático actuando en base a derechos y libertades que hoy se reconocen en nuestra Constitución actual.

En cuanto a los efectos de esta declaración de ilegitimidad de las condenas, sanciones de los Tribunales franquistas, a pesar de que pueda parecer, en un primer momento, que no tiene relevancia jurídica, es importante en lo que respecta a la Declaración de reparación y reconocimiento personal a la que se refiere el art. 4 LMH<sup>43</sup>, ya visto en el capítulo anterior.

---

<sup>41</sup> **art. 3. Declaración de ilegitimidad.**

*1. Se declara la ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones.*

*2. Por ser contrarios a Derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo, se declara en todo caso la ilegitimidad del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, así como los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la presente Ley.*

*3. Igualmente, se declaran ilegítimas, por vicios de forma y fondo, las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la Dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución.*

<sup>42</sup>Cfr. ESCUDERO ALDAY, Rafael *“La Declaración de ilegitimidad de los tribunales franquistas: Una vía para la nulidad de sus sentencias”* en *Derecho y Memoria Histórica*, ed. Trotta, Madrid, 2008, pág. 216-217

<sup>43</sup> **art. 4. Declaración de reparación y reconocimiento personal.**

*“1. Se reconoce el derecho a obtener una Declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra Civil y la Dictadura padecieron los efectos de las resoluciones a que se refieren los artículos anteriores.*

*Este derecho es plenamente compatible con los demás derechos y medidas reparadoras reconocidas en normas anteriores, así como con el ejercicio de las acciones a que hubiere lugar ante los tribunales de justicia.*

*2. Tendrá derecho a solicitar la Declaración las personas afectadas y, en caso de que las mismas hubieran fallecido, el cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad, sus ascendientes, sus descendientes y sus colaterales hasta el segundo grado.*

Los sujetos con derecho a la Declaración a la que hace referencia el art. 4 LMH<sup>44</sup> son aquellos que sufrieron lo ilegítimo de los Tribunales y demás órganos franquistas en sus condenas, sanciones y demás resoluciones. Por tanto, la declaración de ilegitimidad sirve de mecanismo para que el Ministerio de Justicia<sup>45</sup> expida la Declaración de reparación y reconocimiento personal.

Sobre el derecho a la reparación, el Relator destaca en su informe los siguientes puntos<sup>46</sup>:

- Es crucial para la consolidación democrática y para la reconciliación que se dé una concepción amplia de víctima.
- A pesar de los esfuerzos hechos para compensar las iniciales discriminaciones en torno al concepto de víctima para que se incluya a todo tipo de víctimas, para muchas asociaciones y víctimas su consideración es que se les trata como “*víctimas de segunda*”<sup>47</sup>
- Destaca también que es el ámbito más desarrollado en España ya que tanto las viudas y mutilados pertenecientes al Bando Nacional gozaron de pensiones y beneficios durante el franquismo, a partir de 1978 se extendió a los del Bando Republicano, en 1980 para

---

3. Asimismo, podrán solicitar la Declaración las instituciones públicas, previo acuerdo de su órgano colegiado de gobierno, respecto de quienes, careciendo de cónyuge o de los familiares mencionados en el apartado anterior, hubiesen desempeñado cargo o actividad relevante en las mismas.

4. Las personas o instituciones previstas en los apartados anteriores podrán interesar del Ministerio de Justicia la expedición de la Declaración. A tal fin, podrán aportar toda la documentación que sobre los hechos o el procedimiento obre en su poder, así como todos aquellos antecedentes que se consideren oportunos.

5. La Declaración a que se refiere esta Ley será compatible con cualquier otra fórmula de reparación prevista en el ordenamiento jurídico y no constituirá título para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración Pública, ni dará lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional. El Ministerio de Justicia denegará la expedición de la Declaración cuando no se ajuste a lo dispuesto en esta Ley”.

<sup>44</sup> Este artículo señala como sujetos con derecho a dicha Declaración a las víctimas y a sus familiares.

<sup>45</sup> Según el art. 4.5 LMH el Ministerio de Justicia es el órgano competente para expedir esta Declaración.

<sup>46</sup> GREIFF, Pablo de, *op.cit.*, párr. 85-99.

<sup>47</sup> Para el Relator, Pablo de Greiff, destacó en su Informe que sería interesante que en el seno del debate del “Anteproyecto de Ley Orgánica de Estatuto de Víctimas de Delitos” se incluyera como víctimas a las de la Guerra Civil y del franquismo. Este debate concluyó con la aprobación de la Ley 4/2015, de 27 de abril, Estatuto Víctimas de Delitos en su preámbulo estableció como víctimas las que sufren de delitos violentos y contra la libertad sexual, los menores debido a su protección jurídica mayor, las que sufren de violencia de género así como el reconocimiento y la protección integral de las víctimas de terrorismo.

Por tanto, se perdió una gran oportunidad de dotar de mayor protección y reparación a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo.

los que habían pasado un periodo en prisión por motivos ideológicos, en 1990 para los que sufrieron el exilio...<sup>48</sup>

- Afirma también que el mayor gesto de reconocimiento fue la Declaración de reconocimiento personal y de reparación que se incluye en la Ley 52/2007, aunque las víctimas no lo ven así ya que entienden que no constituye una reaparición adecuada.
- El Relator recalca como un valor fundamental el reconocimiento de los hechos y de las responsabilidades, así como la presentación de disculpas oficiales que vayan más allá del reconocimiento genérico.
- Por último, muestra su preocupación por las violaciones sufridas por las mujeres (directa e indirectamente) y la poca atención que se da a este hecho las medidas actuales de reparación.

Finalmente concluye con una serie de recomendaciones<sup>49</sup>:

- Ampliar el reconocimiento y cobertura de los programas de reparación para que lleguen a un mayor número de víctimas, así como realizar mayores esfuerzos para establecer medidas de reparación no materiales y simbólicas.
- Dar mayor visibilidad y un mayor estudio a las violaciones de derechos (violencia sexual, agresiones, humillaciones y discriminación por razón de su afiliación ideológica o las de sus familiares/parejas) que sufrieron las mujeres durante la Guerra Civil y del franquismo.
- A través del derecho comparado establecer medidas para la consecución de la nulidad de las sentencias franquistas.

---

<sup>48</sup> Aún siendo un ámbito desarrollado excluyen a determinadas víctimas como las personas privadas de libertad en regímenes particulares (los que estuvieron en campos de concentración y trabajo) así como los detenidos por la Ley de vagos y maleantes de 1933 que se sustituye por la Ley de peligrosidad social de 1970, lo principal de esto, son las víctimas de condenas y detenciones por razón de su orientación sexual.

<sup>49</sup> GREIFF, Pablo de, *op.cit.*, párr. 104 n) - 104 p)

### III. EL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN UNIVERSAL COMO PARTE FUNDAMENTAL EN LOS PROCESOS DE MEMORIA HISTÓRICA.

#### 1. Concepto y aspectos generales

Desde la doctrina se han dado muchas definiciones de lo que es el principio de jurisdicción universal y todas van en la misma línea, por lo cual, a efectos teóricos se ha escogido una de tantas definiciones.

Para RANDALL se define como *“un principio jurídico que permite o exige a un Estado enjuiciar penalmente ciertos crímenes, independientemente del lugar donde se haya cometido el crimen y de la nacionalidad del autor o de la víctima”*<sup>50</sup>

Las características de este principio son:

- Se encuentra recogido en las legislaciones nacionales, aunque es un principio que se basa y está muy presente en el Derecho Internacional Público.
- Es un instrumento para luchar contra la impunidad y debido al tratarse de crímenes internacionales que por su gravedad afectan a toda la comunidad no requiere, en principio, conexión territorial, de nacionalidad o interés nacional con los hechos.<sup>51</sup>

A nivel institucional, la Asamblea General de la ONU, a través de los Principios de Princeton<sup>52</sup>, afirma que *“se entiende por jurisdicción universal una jurisdicción penal*

---

<sup>50</sup> RANDALL, Kenneth C. “Universal jurisdiction under international law” en *Texas Law Review*, núm. 66, 1988, págs. 785–8.

En la misma línea se pronuncia SATZGER al afirmar que la jurisdicción es *“que todo estado tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre ciertos delitos sin importar la nacionalidad o el domicilio del perpetrador, la ubicación del delito o el domicilio o la nacionalidad de la víctima”* SATZGER, Helmut, *“International and European Criminal Law”* Ed. C.H. Beck. Munich, 2012, pág. 32.

<sup>51</sup> MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Aitor y VERGARA CÉSPEDES, Manuel Miguel, *“La jurisdicción universal como instrumento para la protección de pueblos indígenas: una guía práctica para defensores de derechos humanos”*, Fundación Internacional Baltasar Garzón, Copenhague, 2015, págs. 10-12.

<sup>52</sup> AGNU, Doc. A/56/677, Los principios de Princeton sobre la Jurisdicción Universal, de 4 de diciembre de 2001

El Proyecto de Princeton tuvo origen en una visita efectuada a Princeton en enero de 2000 por William J. Butler y Stephen A. Oxman, quienes, en representación de la Comisión Internacional de Juristas y la Asociación Norteamericana pro Comisión Internacional de Juristas, propusieron la idea de formular principios que contribuyeran a elucidar y ordenar una esfera del derecho penal internacional que adquiere cada vez más importancia: la del enjuiciamiento en tribunales nacionales de delitos graves de derecho internacional, con arreglo a la jurisdicción universal y cuando no existan nexos jurisdiccionales tradicionales con las víctimas o los perpetradores de los crímenes.

*sustentada exclusivamente en la naturaleza del delito, con prescindencia del lugar en que éste se haya cometido, la nacionalidad del autor presunto o condenado, la nacionalidad de la víctima o todo otro nexo con el Estado que ejerza esa jurisdicción”<sup>53</sup>.*

En estos principios se establece que los tribunales ordinarios son competentes de enjuiciar a las personas acusadas por delitos graves de Derecho Internacional así como que la jurisdicción universal sirve de instrumento para la extradición siempre y cuando se demuestre o haya indicios de culpabilidad y sea necesario para garantizar un proceso conforme a las normas procesales internacionales.<sup>54</sup>

En lo referente a los delitos a los que le son aplicables este principio, se recogen una serie de delitos graves (tortura, piratería, esclavitud, guerra, contra la paz, lesa humanidad y genocidio) aunque sin perjuicio a su aplicación a otros delitos de Derecho Internacional.<sup>55</sup>

Además, se trata de delitos imprescriptibles y que, si son cometidos por Jefes de Estado, Gobierno o funcionarios competentes, no quedan exonerados de la responsabilidad ni atenúa la pena. Además, afirma que este principio es incompatible con las leyes o normas que amnistían a los responsables de estos delitos graves contra el Derecho Internacional.<sup>56</sup>

En estos principios se marcan las reglas para resolver las controversias cuando dos o más Estados se muestren competentes para enjuiciar estos delitos así como las controversias entre Estados derivadas del ejercicio de la jurisdicción universal, la cual será sometida la Corte Internacional de Justicia.<sup>57</sup>

El principio de jurisdicción universal recogido en todas las legislaciones nacionales debe ser interpretados por los órganos judiciales en consonancia con los principios contenidos en los Principios de Princeton. Además, en ausencia de que se encuentre recogido en alguna legislación nacional, los órganos judiciales nacionales podrán invocarlo en base al Derecho Internacional para los casos de los delitos que se nombran en el principio núm. 2.1.<sup>58</sup>

---

<sup>53</sup> Ibídem Principio núm. 1.1

<sup>54</sup> Ibídem, Principio núm. 1.2 y 1.3

<sup>55</sup> Ibídem, Principio núm. 2

<sup>56</sup> Ibídem, Principio núm. 5, 6 y 7.

<sup>57</sup> Ibídem, Principio núm. 8 y 14

<sup>58</sup> Ibídem, Principio núm. 13 y 3

La aplicación de la jurisdicción universal por parte de un Estado respeta tanto el principio de legalidad penal como la garantía de respeto al principio *non bis in idem*, al no ser, que se produzca dentro de un procedimiento de enjuiciamiento ficticio o la pena impuesta sea una pena demasiado laxa no garantizándose un juicio justo así.<sup>59</sup>

Por último, cabe destacar que en estos principios se afirma que deberá incluirse una referencia a la jurisdicción universal en todos aquellos tratados y protocolos futuros relativos a las violaciones graves a las que hace referencia el principio núm. 2.1.<sup>60</sup>

Al año siguiente de la publicación de los Principios de Princeton, en el continente africano, nacen los Principios de El Cairo-Arusha.<sup>61</sup>

Estos principios presentan varias novedades respecto a los Principios de Princeton. En primer lugar, el ámbito de aplicación de estos principios, ya que nacen con la intención de que su aplicación se haga dentro del ámbito geográfico del continente africano.

Destaca que la aplicación de estos principios ocurra cuando los delitos graves internacionales que persiguen estos principios se hayan cometido no sólo en tiempos de guerra sino también en tiempos de paz.<sup>62</sup>

No solo se limita su aplicación a las personas físicas, sino que se extiende a las personas jurídicas dependiendo del delito o violación grave internacional ocurrida.<sup>63</sup>

En lo que respecta los delitos a perseguir, añade aquellos delitos que tienen efectos económicos, sociales y culturales graves (saqueo, apropiación indebida, delitos medioambientales graves) según las normas internacionales.<sup>64</sup>

---

<sup>59</sup> Ibidem, Principio núm. 9

<sup>60</sup> Ibidem, Principio núm. 12

<sup>61</sup> Africa Legal Aid, The Cairo-Arusha Principles on Universal Jurisdiction in respect of Gross Human Rights Offences: An african perspective, 18-20 octubre de 2002.

Estos principios nacen propiciados por un grupo de juristas de diversas instituciones y organizaciones, siendo la más destacada *Africa Legal Aid*.

Estos principios están disponibles en:

[https://www.africalegalaid.com/download/policy\\_document/Policy\\_Document.pdf](https://www.africalegalaid.com/download/policy_document/Policy_Document.pdf) (Consultado el día 25 de octubre de 2018)

<sup>62</sup> Ibidem Principio núm. 1

<sup>63</sup> Ibidem Principio núm. 2

<sup>64</sup> Ibidem Principio núm. 4



Además, estos principios son compatibles con el principio general del Derecho Internacional Público de no injerencia en los asuntos de un Estado ya que se basa en delitos que por su importancia, trascienden de lo meramente local para llegar a un plano que importa a la Comunidad Internacional en su conjunto.<sup>65</sup>

Destaca también, que dentro de los principios se afirme que la jurisdicción universal no se utilizará como pretexto para la perpetración de persecuciones por motivos políticos, religiosos, raciales...<sup>66</sup>

Finalmente, y como aspecto positivo, en estos principios se recoge que tanto las víctimas como los testigos requieren de una protección adecuada que debe ser asegurada por los Estados, que el hecho de que en los Estados que han sufrido de los delitos graves, que se persiguen por estos principios, se cree una Comisión de la Verdad no evade de la responsabilidad que el Estado pueda tener, y, que el enjuiciamiento además de la consecución de una pena debe tener efectos de reparación, es decir, tender a la reconciliación, rehabilitación y reconstrucción de la sociedad víctima del delito grave.<sup>67</sup>

Para ROBLES CARRILLO, estos principios responden a la necesidad del continente africano de mostrar su visión acerca de la jurisdicción universal frente al concepto que se tiene en occidente del mismo, es decir, dotar al continente africano de un concepto propio de jurisdicción universal en el que se recogen todas sus peculiaridades. Por tanto, lo que se pretende es que aunque sea un concepto universal no es uniforme.<sup>68</sup>

Posteriormente ya en septiembre de 2015 surgen los Principios de Jurisdicción Universal Madrid-Buenos Aires<sup>69</sup> con el triple objetivo de codificar los elementos en los que

---

<sup>65</sup> Ibídem Principio núm. 6

<sup>66</sup> Ibídem Principio núm. 8

<sup>67</sup> Ibídem Principio núm. 12, 14 y 16.

<sup>68</sup> Cfr. ROBLES CARRILLO, Margarita, “El principio de jurisdicción universal: Estado actual y perspectivas de evolución” en *Revista Española de Derecho Internacional*, Vol. 66, Madrid, julio-diciembre 2014, pág. 104

<sup>69</sup> Estos principios nacen en el seno de dos Congresos Internacionales sobre Jurisdicción Universal celebrados en 2014 en Madrid y en 2015 en Buenos Aires en los que grupos de juristas de reconocido prestigio debaten acerca de la manera de mejorar este principio, así como dotarlo de más elementos para que su aplicación sea más eficaz. Una de las organizaciones más importantes que formó parte y auspició estos Congresos es FIBGAR. Los Principios de Jurisdicción Universal Madrid-Buenos Aires, de 15 de septiembre de 2015 están disponibles en:

<https://www.fibgar.org/upload/proyectos/35/es/principios-de-jurisdiccion-universal.pdf> (Consultado el 12 de noviembre de 2018).

exista consenso, conceptualizar nuevas formas de impunidad y medidas para combatirlas, así como reafirmar los esfuerzos doctrinales existentes.

Estos principios presentan varias novedades respecto a los Principios de Princeton. En primer lugar, además de los delitos recogidos en los primeros, los Principios Madrid-Buenos Aires extienden la aplicación del principio de jurisdicción universal a los delitos económicos y medioambientales que afecten a la comunidad, vayan contra los DDHH o contra el ecosistema. (fraudes alimentarios, aprovechamiento ilícito de bienes de las víctimas, traslados forzosos de comunidades con el fin de explotar los recursos sus tierras, desviación de dinero dirigido internacionalmente a paliar catástrofes humanitarias, especulación bienes sanitarios y de primera necesidad...). También deja la opción de que este principio se apliquen a cualquier delito internacional contenido en un Convenio o Tratado que haya sido ratificado por el Estado en cuestión. Respecto a los delitos a los que son de aplicación este principio, también se establece que se aplican a los delitos conexos de los explicados anteriormente.<sup>70</sup>

Se establece que no sólo son aplicables a las personas físicas, sino que su aplicación se extiende a las personas jurídicas, siempre y cuando se reconozca esta responsabilidad en el ámbito internacional de no ser reconocida serán responsables las personas físicas responsables de la misma). La responsabilidad de las personas jurídicas es independiente de la responsabilidad de las personas físicas, y con el fin de obtener reparación, se procederá al decomiso de los bienes que guarden relación con los delitos cometidos por los responsables. Además, independientemente del ámbito penal cuando los delitos causen daños civiles se podrá aplicar el principio de jurisdicción universal civil.<sup>71</sup>

En lo que respecta a la relación entre la Corte Penal Internacional (CPI) y la jurisdicción universal, se establece que al igual que entre los tribunales nacionales y la CPI existe una relación de complementariedad, la misma relación será con los tribunales que apliquen este principio. Además, se establece no sólo una relación de complementariedad sino también relación de cooperación. La relación de cooperación no sólo será con la CPI sino también con cualquier otro Estado que obre de buena fe y siempre que para la persona a la que se le imputa

---

<sup>70</sup> Ibidem Principio núm. 3, 4, 5 y Anexo

<sup>71</sup> Ibidem Principio núm. 6 y 7. Reconocer que existe un principio de jurisdicción universal civil es un hecho novedoso ya que hasta el momento sólo era de aplicación en el ámbito penal.

la comisión de un delito en el que la jurisdicción universal sea aplicable tenga garantizada su integridad así como las garantías procesales internacionales.<sup>72</sup>

Se reconoce también en estos principios una protección especial de las víctimas (garantías procesales, garantía del bienestar e integridad...) extendiendo el concepto de víctimas a las familiares directos de quien haya sufrido el daño, así como a los terceros que, por ayudar a las víctimas directas, hayan sufrido las consecuencias de los delitos. También se protege tanto a testigos como a peritos. Esta protección especial corresponderá al Estado que esté enjuiciando estos delitos.<sup>73</sup>

La última novedad a destacar, es que estos principios defienden la aplicación de la jurisdicción universal en sistemas de Justicia Transicional cuando estos sistemas han fallado por no respetar los estándares internacionales de justicia imparcial e independiente o cuando estén dirigidos a dejar sin responsabilidad a quien ha cometido los crímenes o violaciones.<sup>74</sup>

## **2. La jurisdicción universal en España**

El principio de jurisdicción universal se regula en el art. 23. 4, 5 y 6 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ).<sup>75</sup>

Este principio ha sufrido varias modificaciones<sup>76</sup> en su articulado desde que se redactara esta ley en el año 1985.

En un primer momento, el principio de jurisdicción universal se recogía en el art. 23.4 LOPJ de una manera bastante amplia estableciéndose que los tribunales españoles eran competentes de los delitos que cometiesen españoles o extranjeros siempre y cuando dichos delitos se tipificaran en España como delitos de “a) *Genocidio*. b) *Terrorismo*. c) *Piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves*. d) *Falsificación de moneda extranjera*. e) *Los delitos*

---

<sup>72</sup> Ibidem Principio núm. 12, 14 y 21

<sup>73</sup> Ibidem Principio núm. 20

<sup>74</sup> Ibidem Principio núm. 17.

<sup>75</sup> Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, BOE, núm. 157, 2 de julio de 1985.

<sup>76</sup> A destacar: reforma del 2009 (art. Primero Uno de Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, por lo que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, BOE núm. 266, de 4 de noviembre de 2009) y reforma del 2014 (art. Único de la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal, BOE núm. 63, de 14 de marzo de 2014).

*relativos a la prostitución. f) Tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes. g) Cualquier otro que, según los tratados y convenios internacionales, deba ser perseguido en España*”<sup>77</sup>

Tras la reforma de la LOPJ del año 2009, el principio de jurisdicción universal sufre varios cambios. Por un lado, deja de ser aplicable a este principio el delito de “*falsificación de moneda extranjera*” pero se empieza a aplicar a los delitos de “*tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, sean o no trabajadores*” y los delitos “*relativos a la mutilación genital femenina, siempre que los responsables se encuentren en España*”<sup>78</sup>. Por otro lado, este principio se vuelve más restrictivo al establecer el requisito de conexión territorial con España, es decir, que las víctimas o responsables tengan nacionalidad española o existan otros vínculos con España.<sup>79</sup>

En el año 2014 se produce la última reforma del principio de jurisdicción universal en su conjunto<sup>80</sup>. En esta reforma además de añadirse delitos, se fijan los requisitos que éstos tienen que tener para que un tribunal español sea competente, fijando una restricción mayor que la reforma vista anteriormente del 2009 en el mismo sentido de establecer requisitos de conexión territorial con España.

En el art. 23. 4 de la LOPJ después de la reforma del 2014 se establece que para el delito de genocidio serán competentes los tribunales españoles cuando se dirija contra un español o extranjero que resida habitualmente en España o se encuentre en España y haya sido denegada su extradición.<sup>81</sup>

Respecto a los delitos de tortura y contra la integridad moral regulados en los art. 174 a 177 CP, los delitos de desaparición forzosa así como los delitos contra regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 11 de mayo de 2011 sobre prevención y lucha contra la violencia contra

---

<sup>77</sup> Art. 23.4 LOPJ (redacción del texto de 1985)

<sup>78</sup> Art. 23. 4 f) y g) LOPJ (redacción tras la reforma de 2009)

<sup>79</sup> Se fija este requisito en el último párrafo del art. 23.4 al establecer que “*Sin perjuicio de lo que pudieran disponer los tratados y convenios internacionales suscritos por España, para que puedan conocer los Tribunales españoles de los anteriores delitos deberá quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española, o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España y, en todo caso, que en otro país competente o en el seno de un Tribunal internacional no se ha iniciado procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva, en su caso, de tales hechos punibles*”.

<sup>80</sup> A través de la Disposición final primera de la Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo. BOE núm. 77, de 31 de marzo de 2015, se modifica el art. 23. 4 e) 2º LOPJ pero se trata de una reforma sobre un punto en concreto.

<sup>81</sup> Art. 23.4 a) LOPJ

las mujeres y la violencia doméstica serán competentes los tribunales españoles contra el responsable de éstos haya sido un español o la víctima sea española y el responsable se encuentre en España.<sup>82</sup>

En casos de delitos cometidos en los espacios marinos (piratería, terrorismo, trata de seres humanos, tráfico de drogas...) serán competentes en los supuestos previstos en los tratados internacionales ratificados por España o cuando así se indique en actos normativos de Organizaciones Internacionales de las que España sea parte<sup>83</sup>.

En casos de delitos de terrorismo son competentes:

- En función del responsable y de la víctima: Si el responsable es una persona física, cuando el responsable sea español, extranjero con residencia habitual o se encuentra en España o que colabore con un español, o con un extranjero que resida o se encuentre en España, para la comisión de tal delito, y si es una persona jurídica, si tiene su domicilio en España. En el caso de la víctima, simplemente valdría con que tuviera la nacionalidad española cuando se cometió el delito.<sup>84</sup>
- En función del bien o institución contra la que se atente: Para influir o condicionar de un modo ilícito la actuación de cualquier Autoridad española; contra una institución u organismo de la Unión Europea que tenga su sede en España; contra un buque o aeronave con pabellón español o, contra instalaciones oficiales españolas, incluyendo sus embajadas y consulados.<sup>85</sup>

Respecto a los delitos contenidos en el Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves y en el Convenio sobre la protección física de materiales nucleares serán competentes cuando el responsable sea español o contra una aeronave española (en el caso del primero).<sup>86</sup>

---

<sup>82</sup> Art. 23.4 b), c) y l) LOPJ

<sup>83</sup> Art. 23.4 d) LOPJ

<sup>84</sup> Art. 23.4 e) 1º al 4º LOPJ

<sup>85</sup> Art. 23.4 d) 5º al 8º LOPJ en el último párrafo se establece que “*se entiende por instalación oficial española cualquier instalación permanente o temporal en la que desarrollen sus funciones públicas autoridades o funcionarios públicos españoles*”.

<sup>86</sup> Art. 23.4 f) y h) LOPJ

En los delitos contenidos en el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil y en su Protocolo complementario en los supuestos que se contemplan en los mismos.<sup>87</sup>

Respecto al delito de tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes u otras sustancias cuando el responsable sea español o cuando se trate de un grupo u organización criminal con intención de realizar estos delitos en España.<sup>88</sup>

Cuando se trate de delitos contra la libertad e indemnidad sexual sobre menores, trata de seres, corrupción entre particulares o en las transacciones económicas internacionales y los regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 28 de octubre de 2011, sobre falsificación de productos médicos y delitos que supongan una amenaza para la salud pública son competentes, si la persona física responsable es española o un extranjero residente habitual en España, y, si se trata de una persona jurídica cuando tenga sede o domicilio social en España. Además, son competentes si la víctima de estos delitos es española o extranjero residente habitual en España, cuando se cometen estos delitos.<sup>89</sup>

Respecto a los delitos de constitución, financiación o integración en grupo u organización criminal cuando éstos tengan la intención de cometer delitos con pena máxima igual o superior a tres años de prisión en España.<sup>90</sup>

Por último, en lo que respecta a otros delitos contenidos en Tratados ratificados por España, así como en actos de OOII de los que España sea miembro son competentes los tribunales españoles en los términos que se contemplen en los mismos.<sup>91/92</sup>

También se establece que en ningún caso son competentes los tribunales españoles cuando ya se estuviera investigando o enjuiciando en otro Tribunal Internacional según se fije en Convenios o tratados ratificados por España, o, cuando se investigue o enjuicie donde se

---

<sup>87</sup> Art. 23.4 g)

<sup>88</sup> Art. 23.4 i)

<sup>89</sup> Art. 23.4 k), m), n) y o)

<sup>90</sup> Art. 23.4 j)

<sup>91</sup> Art. 23.4 p)

<sup>92</sup> En el último párrafo del apartado 4 se establece que son competentes los tribunales españoles, cuando alguno de los delitos descritos en el apartado 4 los cometa un extranjero, aunque no resida ni tenga vinculación con España siempre y cuando se haya negado su extradición por parte de España.

cometieron los hechos o en el Estado de nacionalidad de la persona supuestamente responsable (cuando éste no estuviera en España o cuando no hubiera orden de extradición en su contra)<sup>93</sup>

Además, se establece que en el caso de los delitos contenidos en el apartado 4 del art. 23 LOPJ solo podrán ser iniciados mediante querella por el agraviado o por el Ministerio Fiscal.<sup>94</sup>

Con la reforma del 2014, además, se añadió que “las causas que en el momento de entrada en vigor de esta Ley se encuentren en tramitación por los delitos a los que se hace referencia en la misma quedarán sobreseídas hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en ella”.<sup>95</sup>

El Relator Especial de la ONU destaca que el principio de jurisdicción universal en España ha sido un ejemplo para muchos Estados, pero muestra su preocupación por las reformas realizadas en 2009 y 2014 ya que han supuesto una gran limitación de este principio, teniendo algunos jueces españoles que invocar a estándares internacionales para poder seguir con las causas que estaban instruyendo, aunque en ninguna se haya logrado con éxito la continuación de la causa.

Señala también en los casos de extradición en los que existe una solicitud de la justicia argentina de extraditar a dos supuestos responsables de delitos de tortura durante la represión franquista, España tiene la obligación de cooperar con dicha justicia o bien investigar o juzgar si se niega la extradición.<sup>96</sup>

Para AMNISTÍA INTERNACIONAL la reforma cometida en 2014 relativa a la jurisdicción universal plantea cuestiones graves de incompatibilidad con el derecho internacional, los tratados internacionales y con la CE. Debido a estas cuestiones:

---

<sup>93</sup> Lo segundo no es de aplicación cuando el Estado no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación (cuando el juicio o investigación haya sido dirigido o sufra diligencias indebidas tendentes a dejar sin responsabilidad penal a la persona contra quien se dirige o no sea imparcial e independiente) o no pueda realmente hacerlo (por colapso total o sustancial de la administración de justicia o cuando ésta es ausente, no dispone de las pruebas y los testimonios necesarios ...) y así se valore por la Sala 2.ª del Tribunal Supremo, a la que elevará exposición razonada el Juez o Tribunal. Art. 23.5 LOPJ

<sup>94</sup> Art. 23.6 LOPJ

<sup>95</sup> Disposición transitoria única Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal, BOE núm. 63, de 14 de marzo de 2014

<sup>96</sup> DE GREIFF, Pablo, *op.cit.* párr. 83-84.

- Los tribunales españoles deberían ejercer su competencia para perseguir delitos internacionales graves, no aplicando las disposiciones del art. 23.4 contrarias a las obligaciones internacionales de España.
- Promover desde Fiscalía de oficio una cuestión de inconstitucionalidad de la reforma alegando la vulneración del derecho internacional y constitucional.
- Promover legislación que prevea, sin limitaciones indebidas, el principio de jurisdicción universal absoluto, es decir, sin requisitos de territorialidad ni de conexión<sup>97</sup>.

### **3. La querella argentina contra los crímenes del franquismo en virtud de la aplicación del principio de jurisdicción universal.**

Antes de entrar en la cuestión de la querella argentina sobre los crímenes del franquismo hace falta explicar muy brevemente como se regula la jurisdicción universal en Argentina y el porqué es competente para la investigación de este asunto.

Así en el art. 118 de la Constitución argentina, se establece que cuando los delitos se cometan fuera del territorio argentino y si éstos van contra el Derecho de Gentes, se tiene que establecer una ley especial para el enjuiciamiento.<sup>98</sup>

Después ya a nivel legislativo ordinario a través de la Ley 26.200 de 13 de diciembre de 2006 (su entrada en vigor es el 5 de enero de 2007) mediante la cual se implementa el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece que esta ley será de aplicación para la persecución de delitos cuando así lo prevea un Convenio internacional en el que sea parte Argentina (art. 3. d)<sup>99</sup>, así como que cuando por la comisión de delitos perseguibles por dicha

---

<sup>97</sup> Cfr. AMNISTÍA INTERNACIONAL, *“Análisis de Amnistía Internacional sobre la reforma de la jurisdicción universal en España tras la aprobación de la LO 1/2014”*, octubre de 2014, pág. 28

<sup>98</sup> **Art. 118 Constitución Argentina, de 23 de agosto de 1994.**

Todos los juicios criminales ordinarios, que no se deriven del derecho de acusación concedido a la Cámara de Diputados se terminarán por jurados, luego que se establezca en la República esta institución. La actuación de estos juicios se hará en la misma provincia donde se hubiere cometido el delito; pero cuando éste se cometa fuera de los límites de la Nación, contra el Derecho de Gentes, el Congreso determinará por una ley especial el lugar en que haya de seguirse el juicio.

<sup>99</sup> **Art. 3 de la Ley 26.200 de 13 de diciembre de 2006 mediante la cual se implementa el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional**

Esta ley se aplica:

- a) A los delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en el territorio de la República Argentina, o en los lugares sometidos a su jurisdicción;
- b) A los delitos cometidos en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas en desempeño de su cargo;
- c) A los delitos cometidos fuera del territorio argentino por nacionales argentinos o por personas domiciliadas en la República Argentina, siempre que el imputado no haya sido absuelto o condenado en el extranjero o, en este último caso, no haya cumplido la pena;



ley no se procediera a la extradición o entrega a la CPI, Argentina será competente para juzgar estos casos, siempre y cuando no se esté enjuiciando en el Estado de la comisión del delito o competente (art. 4).<sup>100</sup>

El 14 de abril de 2010 Darío Rivas Cando e Inés García Holgado, familiares de víctimas del franquismo, junto con algunas organizaciones no gubernamentales<sup>101</sup>, interpusieron una querella ante los Tribunales de la República Argentina, sobre los crímenes de genocidio, lesa humanidad (torturas, asesinatos, desapariciones forzadas), y demás ilícitos cometidos en España desde el inicio de la Guerra Civil (18 de julio de 1936) hasta las primeras elecciones después de la Dictadura franquista (15 de junio de 1977).

En un primer momento la querella fue desestimada mediante Auto debido que la justicia argentina consideraba que correspondía al Estado español el enjuiciamiento de estos hechos y que al ya estar siendo investigados los mismos por la justicia española sólo cabía la desestimación y archivo.<sup>102</sup>

---

d) En los casos previstos en convenios internacionales de los que la República Argentina es parte.

<sup>100</sup> **Art. 4 de la Ley 26.200 de 13 de diciembre de 2006 mediante la cual se implementa el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional**

Cuando se encuentre en territorio de la República Argentina o en lugares sometidos a su jurisdicción una persona sospechada de haber cometido un crimen definido en la presente ley y no se procediera a su extradición o entrega a la Corte Penal Internacional, la República Argentina tomará todas las medidas necesarias para ejercer su jurisdicción respecto de dicho delito.

<sup>101</sup> Entre estas asociaciones se encuentra la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo (CeAQUA) ([www.ceagua.org](http://www.ceagua.org)) y la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica ([www.memoriahistorica.org.es](http://www.memoriahistorica.org.es)), las cuales son dos asociaciones que trabajan para la recuperación de la memoria histórica en España así como para la consecución de la verdad, de la justicia y de la reparación para las víctimas y familiares de la Guerra Civil así como la represión franquista.

Merece la pena visitar sus páginas web porque en ella se encuentran numerosos recursos didácticos para poder investigar sobre la Memoria Histórica, así como porque supone una forma de lucha para los familiares y ayuda a mantener viva la memoria y el recuerdo de una gran cantidad de víctimas frente al inmovilismo de la Administración en muchos casos.

Aunque en un inicio fueran dos familiares y unas pocas las organizaciones que presentaron la querella, hay numerosas víctimas, asociaciones, ayuntamientos que se han adherido a la misma. Entre otros muchos, véase: Parlamento Vasco: (<https://www.publico.es/espana/parlamento-vasco-adhiere-querella-franquismo.html>) Valencia: (<https://www.publico.es/politica/valencia-muestra-apoyo-querella-argentina.html>) Castellón(<https://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/castellon/2017/05/25/592741ef22601de05b8b4614.html>)

Asociación Pro Derechos Humanos  
([https://cadenaser.com/ser/2013/10/11/espana/1381449026\\_850215.html](https://cadenaser.com/ser/2013/10/11/espana/1381449026_850215.html))

<sup>102</sup> Auto del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal núm. 1 de Buenos Aires, Causa núm. 29.275 “NN s/ desestimación de denuncia y archivo” Expte. núm. 4.591/2010, de 5 de mayo de 2010, párr. 4. Esta decisión fue tomada en base a un Informe de la Fiscalía vinculante, el cual, fue recurrido y anulado mediante Decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala 2º, Causa núm. 29.275 “NN s/ desestimación de denuncia y archivo”, Expte. núm. 4.591/2010, de 3 de septiembre de 2010, párr. 5 y 6, en la cual se afirmó que no además de no existir sustento suficiente en las afirmaciones del Fiscal, no se siguió el control de legalidad del Informe de Fiscalía por parte de la magistrada.

Posteriormente, tras la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones de lo Criminal y Correccional Federal, la querella fue admitida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal núm. 1 de Buenos Aires, pasándose a denominar esta causa como “*Causa n° 4591/2010. N.N. por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936, comienzo del golpe cívico militar, y el 15 de junio de 1977, fecha de celebración de las primeras elecciones democráticas*”.<sup>103</sup>

En el marco de este proceso, desde la justicia argentina se dictan varias órdenes de detención y extradición de responsables franquistas presuntamente autores de la comisión de delitos de torturas, genocidio, desapariciones forzosas (Auto 18 de septiembre de 2013<sup>104</sup> y Auto de 30 de octubre de 2014<sup>105</sup> del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal núm. 1 de Buenos Aires).

Como contestación a estos Autos, respecto al primero, el Gobierno hace caso omiso no contestando a la reclamación de la justicia argentina y es la Audiencia Nacional (AN) la que se encarga de denegar la extradición. La AN deniega la petición en base a que el delito está prescrito al no tratarse de delitos de torturas incluidos dentro del delito de lesa humanidad ya que esto supondría que hubieran utilizado estas torturas dentro de “*un ataque generalizado o sistemático contra la población civil*”.<sup>106</sup>

---

<sup>103</sup> Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal núm. 1 de Buenos Aires por la comisión de los delitos de genocidio y/o de lesa humanidad que tuvieron lugar en España en el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, de 14 de abril de 2010

<sup>104</sup> En este Auto se solicita vía Interpol la detención de cuatro supuestos torturadores franquistas (Juan Antonio González Pacheco, José Ignacio Giralte González, Celso Galván Abascal, y Jesús Muñecas Aguilar) y solicitando al Gobierno español su extradición.

<sup>105</sup> En este auto se solicita la detención para la averiguación en la investigación de Rodolfo Martín Villa (Exministro de Gobernación), José Utrera Molina (Exministro de la vivienda y Secretario General del Movimiento), Antonio Carro Martínez (Exministro de la Presidencia del franquismo), Fernando Suárez González (Exministro de Trabajo), Licinio de la Fuente (Ex vicepresidente), Antonio Barrera de Irimo (Exministro de Hacienda), José María Sánchez-Ventura Pascual (Exministro de Justicia), Alfonso Osorio García (Exministro de la Presidencia), Jesús Quintana Saracíbar (Excapitán de Policía), Carlos Rey González (Exintegrante del Consejo de Guerra), Antonio Troncoso de Castro (Exjuez), Jesús Cejas Mohedano (Exjuez), Abelardo García Balaguer (Exmédico), Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz Pascual, Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés y Atilano del Valle Oter (expolicías) a fin de que sean extraditados.

<sup>106</sup> Auto AN núm. 14/2014 Sala de lo Penal, Sección 2ª, 30 de abril de 2014

Respecto al segundo Auto, es el Gobierno quien contesta a este a través de un Acuerdo del Consejo de Ministros en el que se decide denegar las extradiciones, no continuando con los procedimientos de extradición pasiva.<sup>107</sup>

Posteriormente, en 2016, la Fiscalía General del Estado emitió una circular interna en la que establece su posición contraria a la causa argentina ya que lo investigado por la justicia argentina fue supuestamente cometido por personas españolas contra personas de igual nacionalidad dentro del territorio de España, son hechos que están prescritos ya que la imprescriptibilidad de los delitos de genocidio y lesa humanidad no se reconoce hasta el 2004 en la legislación nacional con la reforma de la LO 15/2003 siendo las normas sancionadoras no favorables no retroactivas, defiende también que a los hechos investigados por la causa argentina le son de aplicación la Ley de Amnistía, afirma que ya existen procedimientos en España tendentes al esclarecimiento de los hechos así como al restablecimiento de la memoria histórica, y por último, afirma que la causa argentina es “*un proceso inviable y ajeno al interés de la justicia*” ya que el procedimiento penal busca la imposición de una pena no la verdad histórica.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> Acuerdo del Consejo de Ministros de no continuación de procedimientos de extradición pasiva, Madrid, 13 de marzo de 2015. Texto completo:

(<http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2015/refc20150313.aspx#Argentina>)

“El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo sobre la no continuación de procedimientos de extradición pasiva, solicitados por las autoridades argentinas, contra veinte ciudadanos españoles por una serie de hechos acontecidos en los años 70 del siglo pasado.

Después de los informes jurídicos correspondientes, y contando con el informe en su día de la Audiencia Nacional, la denegación de la concesión de las extradiciones se basa en los siguientes motivos: el principio de jurisdicción preferente, por el cual, cuando la Ley de un Estado prevé la competencia para enjuiciar a sus ciudadanos, es motivo suficiente para no conceder la extradición; el principio de la extinción de la responsabilidad criminal, pues los delitos que supuestamente se les imputan fueron cometidos en los años 70 y la Ley penal de entonces, el Código Penal de 1973, tenía una previsión de extinción de la responsabilidad de quince años; y el principio de la no doble incriminación”.

<sup>108</sup> Circular de la Fiscalía General del Estado, de 30 de septiembre de 2016

## IV. LA SIMBOLOGÍA FRANQUISTA EN ESPAÑA: ESPECIAL MENCIÓN AL VALLE DE LOS CAÍDOS COMO SÍMBOLO A DESTACAR.

### 1. Regulación de la simbología franquista en España.

En la LMH, la cuestión de la simbología se encuentra regulada en los art. 15, 16, 17 y en la Disposición Adicional Sexta, aunque en este apartado sólo se hará referencia al art.15 y al art.17 ya que las otras disposiciones serán tratadas en el apartado posterior<sup>109</sup>.

Así según el art. 15 LMH hay que distinguir entre si la simbología se encuentra en manos públicas o privadas, la utilización que se haga de la misma, así como si concurren razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley. En función de la utilización que se haga de la simbología, se podrán adoptar medidas como retirada de la simbología, de ayudas públicas o subvenciones. Por otro lado, insta a cooperar tanto con CCAA y Ayuntamientos para *“la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura”*.<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> En este apartado sólo se va a ver legislación nacional no obstante a nivel autonómico existen varias normas las cuales son muy importantes e interesantes dignas de estudio. Véase entre otros: Cataluña (Orden IRP/91/2010, de 18 de febrero, por la que se crea la Red de Espacios de Memoria Democrática de Cataluña. DOGC núm. 5576 de 26 de febrero de 2010), Andalucía (Decreto 264/2011, de 2 de agosto, por el que se crean y regulan la figura de Lugar de Memoria Histórica de Andalucía y el Catálogo de Lugares de Memoria Histórica de Andalucía, *BOJA*, núm. 158, 12 de agosto de 2011, Acuerdo de 20 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran catorce Lugares de Memoria Histórica de Andalucía, *BOJA*, núm. 63, 20 de marzo de 2012 completados por Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, *BOJA*, núm. 63, 3 de abril de 2017), Navarra (Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 30 de noviembre de 2016, por el que se da por enterado y ratifica el Censo provisional de símbolos franquistas y acepta las Recomendaciones para la retirada de dicha simbología, elaborados por la Comisión Técnica de Coordinación en materia de Memoria Histórica, *BON*, núm. 9, 13 de enero de 2017, Ley Foral 16/2018, de 27 de junio, por la que se modifica la Ley Foral 33/2013, de 26 de noviembre, de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936, *BON*, núm. 134, 12 de julio de 2018).

<sup>110</sup> **art. 15. Símbolos y monumentos públicos.**

*Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas.*

*Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurren razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley.*

*El Gobierno colaborará con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura a los efectos previstos en el apartado anterior.*

*Las Administraciones públicas podrán retirar subvenciones o ayudas a los propietarios privados que no actúen del modo previsto en el apartado 1 de este artículo.*

El art. 17 LMH establece que, respecto a las edificaciones y obras realizadas por víctimas de la represión franquista a través de trabajos forzados, al Gobierno junto al resto de la Administración le corresponde la elaboración de un censo de dichas obras y edificaciones.<sup>111</sup>

En fecha 6 de noviembre mediante Orden del Ministerio de Cultura en el que se recoge el Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de octubre, se dictan las instrucciones para la retirada de símbolos franquistas en los bienes de la Administración General del Estado y sus organismos públicos dependientes<sup>112</sup>.

Según este Acuerdo y, en virtud del art. 15 LMH, habría que retirar todos los símbolos (placas, escudos, insignias...) que fuera en contra de dicho artículo y perteneciesen a la Administración o cualquier órgano dependiente con la excepción de aquellos Bienes de Interés Cultural en los que los símbolos tengan significado histórico, religioso, artísticos (siempre que estuviese especificado su carácter histórico, religioso o artístico en el proyecto y se contenga en la declaración de Bien de Interés Cultural) o por criterios técnicos (su retirada supusiera un riesgo para el elemento en el que se encuadra el símbolo). El órgano encargado de revisar si se cumplen las excepciones expuestas es una Comisión Técnica de expertos constituida por el Ministerio de Cultura.

Esta Comisión Técnica de expertos está compuesta por una serie de expertos en materias artísticas, sociales, históricas, y está presidida por el Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales. Esta Comisión trabaja previa solicitud del órgano competente y es la encargada de cumplir y valorar los requisitos explicados anteriormente. Una vez que se ha hecho la solicitud a la Comisión, ésta en el plazo de 3 meses emite un informe con su estudio y recomendaciones.<sup>113</sup>

---

<sup>111</sup> **Art. 17. Edificaciones y obras realizadas mediante trabajos forzados.**

*El Gobierno, en colaboración con las demás Administraciones públicas confeccionará un censo de edificaciones y obras realizadas por miembros de los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, así como por prisioneros en campos de concentración, Batallones de Trabajadores y prisioneros en Colonias Penitenciarias Militarizadas.*

<sup>112</sup> ORDEN CUL/3190/2008, de 6 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 31 de octubre de 2008, por el que se dictan instrucciones para la retirada de símbolos franquistas en los bienes de la Administración General del Estado y sus organismos públicos dependientes, *BOE* núm. 269, 7 de noviembre de 2008.

<sup>113</sup> Esta Comisión se regula por la ORDEN CUL/459/2009, de 19 de febrero, por la que se crea y regula la Comisión Técnica de Expertos para la valoración de los supuestos determinantes de la excepcionalidad en la retirada de símbolos, *BOE*, núm. 51, 28 de febrero de 2009.

La Comisión dentro de su forma de trabajar elabora un informe en el que establece los criterios generales de actuación respecto al catálogo de vestigios hecho por la misma Comisión. Así distingue entre varias tipologías:

## 2. El Valle de los Caídos como símbolo destacado del franquismo

### A) Régimen jurídico.

El Valle de los Caídos dentro de la LMH tiene una mención especial, se regula tanto en el art. 16 LMH como en la Disposición Adicional Sexta, pero hay que ir a unas cuantas décadas atrás para encontrar su base jurídica.

El 1 de abril de 1940 a través de un Decreto<sup>114</sup> se declara la necesidad de alzar un monumento grandioso como homenaje a los héroes y mártires de la Gran Cruzada y que sirva para perpetuar la memoria de los mismos.

En 23 agosto de 1957, a través de un Decreto-Ley<sup>115</sup> establece la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, para definir al monumento no como una simple construcción material sino un lugar de oración y estudio por los que dieron su vida por su Fe y por la Patria amparado por la fe religiosa del pueblo, así como por el sentido católica de la Cruzada. En este Decreto-Ley se establece que el Patronato de la Fundación y su representación corresponde al Jefe del Estado<sup>116</sup> (art. 2). Así establece la necesidad de regular un Convenio con la Abadía Benedictina de Silos con algunas obligaciones mínimas como dirigir el Centro de Estudios Sociales, estudio de la evolución del pensamiento social, estudio de la doctrina de los pensadores católicos y de los Pontífices, así como el mantenimiento del culto.<sup>117</sup> (art. 5)

El art. 16 LMH<sup>118</sup> establece que se regirá por las normas aplicables tanto a los lugares de culto como a los cementerios públicos. Por tanto, no permite actos que sean contrarios a

---

*“I. Escudos en relieve situados en fachadas de edificios II. Otros relieves en edificios III. Inscripciones y lápidas conmemorativas en edificios IV. Inscripciones en monumentos y soportes diversos portátiles o aplicados V. Piezas de índole escultórica (estatuas, bustos, etc.) VI. Piezas realizadas con técnicas pictórica o fotográfica VII. Piezas textiles y uniformes VIII. Mobiliario y utensilios de uso doméstico IX. Símbolos en vidrieras X. Símbolos en monumentos y soportes diversos XI. Otras tipologías”.* Sin querer ser exhaustivo, véase: Informe sobre los criterios generales Adoptados en los Acuerdos de la Comisión Técnica de Expertos de la Ley de Memoria Histórica, 16 de septiembre de 2011. Disponible:

[http://www.memoriahistorica.gob.es/es-es/vestigios/Documents/Criterios\\_Generales\\_Version\\_16092011MT.pdf](http://www.memoriahistorica.gob.es/es-es/vestigios/Documents/Criterios_Generales_Version_16092011MT.pdf)

<sup>114</sup> Decreto, 1 abril de 1940, disponiendo se alce Basílica, Monasterio y Cuartel de Juventudes, en la finca situada en la vertiente de la Sierra de Guadarrama (El Escorial), conocida como Cuelga-muros para preservar la memoria de los Caídos en nuestra Gloriosa Cruzada, *BOE*, núm. 93, 2 de abril de 1940.

<sup>115</sup> Decreto-Ley, 23 de agosto de 1957, por el que se establece la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, *BOE*, núm. 226, 5 de septiembre de 1957.

<sup>116</sup> *Ibidem*, art. 2

<sup>117</sup> *Ibidem*, art.5

<sup>118</sup> **art. 16. Valle de los Caídos.**

*“El Valle de los Caídos se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos.*

estas características, menos aún, actos políticos exaltando a la Guerra Civil, al franquismo o a sus dirigentes.

El art. 16 LMH es completado con la Disposición Adicional Sexta<sup>119</sup> de la misma Ley, la cual establece que la Fundación que gestiona el Valle de los Caídos tendrá que fomentar la reconciliación y convivencia además de establecer como objetivo la honra y rehabilitación de la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y de la posterior, represión.

En agosto del 2018, tanto el art. 16 LMH como la Disposición Adicional Sexta han sufrido una reforma<sup>120</sup>, en la que se añade en el caso del art. 16 LMH un tercer apartado en el que se establece que en el Valle de los Caídos sólo podrá yacer fallecidos a causa de la Guerra Civil, y en caso de la Disposición Adicional Sexta, se añade una Disposición Adicional Sexta bis estableciendo el procedimiento de exhumación de los restos de aquellas personas que no cumplen con el art. 16.3 LMH<sup>121</sup>

## **B) La Comisión de expertos para el futuro del Valle de los Caídos**

El 27 de mayo de 2011, a través de un Acuerdo del Consejo de Ministros, debido a que el Valle de los Caídos es el símbolo más importante del franquismo y con el fin de la elaboración de un informe sobre el futuro del mismo en virtud a lo dispuesto en la LMH, se creó una Comisión de expertos para el Futuro del Valle de los Caídos.

Esta comisión se compuso de varios catedráticos de Derecho y de Historia Contemporánea, así como de investigadores, antropólogo del CSIC, gente del Gabinete del

---

*En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo”.*

<sup>119</sup> **Disposición Adicional Sexta LMH**

*“La fundación gestora del Valle de los Caídos incluirá entre sus objetivos honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil de 1936-1939 y de la represión política que la siguió con objeto de profundizar en el conocimiento de este período histórico y de los valores constitucionales. Asimismo, fomentará las aspiraciones de reconciliación y convivencia que hay en nuestra sociedad. Todo ello con plena sujeción a lo dispuesto en el artículo 16”.*

<sup>120</sup> Real Decreto-ley 10/2018, de 24 de agosto, por el que se modifica la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, BOE, núm. 206, 25 de agosto de 2018.

<sup>121</sup> Este procedimiento se basa en la necesidad urgente y excepcional de interés público de exhumar los restos que no cumplen con el art. 16.3 LMH, siempre desde el respeto y la dignidad de los restos. El Procedimiento comienza de oficio por parte del Consejo de Ministros y se traslada a los familiares para que en un plazo determinado aleguen lo que consideren, así como la indicación de la ubicación en la que se quiere reinterhumar los restos. Posteriormente el Consejo de Ministros pide un informe no vinculante a los órganos de las CCAA de salud mortuoria y procede o no a la exhumación de los restos, indicando la ubicación en la que se le dará sepultura (Disposición Adicional Sexta bis)

Ministro de Presidencia, y su misión, fue la de elaborar en el plazo de cinco meses el informe al que se hacía referencia en el párrafo anterior.<sup>122</sup>

Finalmente, el 29 de noviembre de 2011, la Comisión entregó al Ministro de Presidencia su Informe<sup>123</sup> en el que hace un estudio del asunto (consideraciones<sup>124</sup>), así como concluye con una serie de recomendaciones.

Considera que existe un grave deterioro del conjunto monumental remitiéndose a lo dicho por los técnicos de Patrimonio Nacional los cuales establecen que tras hacerse trabajos de mantenimiento y conservación el estado actual seguía siendo no aceptable por lo que se requeriría una inversión de más de trece millones de euros para la reparación del conjunto. Este deterioro se puede entender como un fracaso de un proyecto de objetivos excluyentes en su principio ya que fue construido con mano de obra de los vencidos y con discursos sectarios con el fin más que de reparar de abrir más fracturas de la guerra. No se puede olvidar que en este conjunto se encuentran inhumados más de treinta mil personas, muertos a causa de la Guerra Civil y que pertenecen a distintas ideologías, que merecen todo el recuerdo y respeto.

Recuperar la memoria de las víctimas supone tanto un progreso moral como justicia ya que se logra poner de manifiesto la injusticia que se cometió con las mismas. Como ya se ha dicho antes el Valle de los Caídos nace con una intención excluyente (homenajear a los vencederos e invisibilizar a los vencidos), cabe recordar que las personas inhumadas allí corresponden a los dos bandos y junto con el sufrimiento de las personas que padecieron las consecuencias de la Guerra parece lógico que se resignifique como un espacio de memoria democrática. Esta resignificación debe abordarse de una manera global, es decir, no hay que cambiar elementos sino explicar el qué y el porqué de lo que hizo de una manera objetiva e imparcial en todo el conjunto, explicando entre otras cosas, el motivo del lugar de preeminencia de los enterramientos de José Antonio Primo de Rivera y de Francisco Franco frente a los enterramientos en criptas laterales de las más de treinta mil personas enterradas en el Valle de los Caídos.

---

<sup>122</sup> Orden PRE/1396/2011, de 27 de mayo, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se crea la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos, *BOE*, núm. 127, 28 de mayo de 2011.

<sup>123</sup> Informe de la Comisión de expertos para el Futuro del Valle de los Caídos, 29 de noviembre de 2011. Disponible:

(<http://www.memoriahistorica.gob.es/es-es/vallecaidos/Documents/InformeComisinExpertosValleCados.pdf>)

<sup>124</sup> *Ibidem*, págs. 6-16.



Respecto a las personas enterradas en el Valle de los Caídos debe hacerse una investigación con la finalidad de que se iguale a las personas identificadas con las desconocidas, así como para establecer a través de una base de datos, el derecho de que tanto familiares de víctimas como el conjunto de la sociedad pueda conocer quienes se encuentran enterrados en este sitio además de las circunstancias que llevarán a su inhumación en tal lugar.

En lo que respecta al conjunto de la Basílica, la Comisión considera que la retirada de diversos símbolos, así como tratar de equilibrarlos con otros símbolos opuestos perjudicaría la explicación de la finalidad que tuvo este conjunto en un primer momento, la cual es importante y sana para el ejercicio de la reparación y de la construcción de memoria democrática. Al tratarse de un lugar de culto es la Iglesia quien tiene las competencias en su interior así que cualquier obra, inhumación, exhumación debe ser autorizada por la Iglesia.

Como ya se ha visto antes con la regulación, el art. 16 LMH distingue el carácter público del cementerio-osario y el sagrado de la Basílica<sup>125</sup>. El caso de los enterramientos en el Valle de los Caídos puede tratarse como un cementerio público especial en el cual no existe discriminación por razón de creencias y que se rige por el principio de estabilidad de los enterramientos y está sometido a la exclusiva potestad estatal.<sup>126</sup>

Afirma la Comisión, que el estado en el que se encuentran los columbarios que contienen los restos de las personas enterradas allí están en mal estado debido a filtraciones, humedades, estrés térmico.... Además, durante años se han producidos traslados de cajas con restos sin seguir ningún orden ni siendo documentado, por lo que parece correcto recuperar del anonimato y del hacinamiento a las personas enterradas en los osarios a fin de que éstas gocen de recuerdo y respeto.

Señala la Comisión, que es positivo que se tengan en cuenta las demandas de las asociaciones de víctimas que lo único que quieren es tener conocimiento de la situación en la que se encuentran sus familiares, recuperar sus restos para darles un enterramiento digno, así como información de traslados de restos de una cripta a otra. Alegan las familias que traslados

---

<sup>125</sup> El canon 1210 Código Canónico establece que “En un lugar sagrado sólo puede admitirse aquello que favorece el ejercicio y el fomento del culto, de la piedad y de la religión, y se prohíbe lo que no esté en consonancia con la santidad del lugar. Sin embargo, el Ordinario puede permitir, en casos concretos, otros usos, siempre que no sean contrarios a la santidad del lugar”. Por tanto, es obligación del Abad impedir que se celebren actos contrarios a la religiosidad.

<sup>126</sup> Los enterramientos de José Antonio Primo de Rivera y de Francisco Franco están situados cerca del altar de la Basílica por lo que su competencia corresponde a la autoridad eclesiástica.

de restos, que se encontraban en fosas comunes republicanas, fueron realizados sin consentimiento de las mismas, existiendo documentación al respecto de algunos casos. También hay que tener en cuenta de ser posible el cumplimiento de estas reclamaciones de las familias y asociaciones de ser posible técnicamente como encajarían tanto con los recursos existentes, así como, más importante aún, con el derecho de los familiares que puedan tener intereses contrarios a dichas reclamaciones.

Respecto a los enterramientos de José Antonio Primo de Rivera y de Francisco Franco los cuales están enterrados en un lugar preeminente del Valle de los Caídos, cerca del altar mayor, en el caso del primero, la Comisión establece que esta preeminencia va contra el igual trato frente al resto de enterrados en el Valle. En el caso del segundo, la Comisión considera que su presencia va en contra de la finalidad del monumento ya que su fin primitivo era albergar los restos de fallecidos en la Guerra Civil.

Sobre la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, establece que, aunque tenga apariencia de Fundación no tiene esta consideración por parte de la Comisión ya que carece de patrimonio propio ya que sus bienes son de dominio público. Depende de Patrimonio Nacional por su naturaleza análoga y funcionamiento similar a los Reales Patronatos. Por tanto, afirma que el Gobierno tiene amplia capacidad de disposición sobre todo esta Fundación y sus bienes.

Por último, y sobre la Comunidad Benedictina, solo establece que convendría distinguir entre las obligaciones religiosas y de culta (corresponde a dicha Comunidad) y las de investigación en ciencias sociales (Estado).

Tras las consideraciones contenidas en el apartado anterior, la Comisión de expertos en su propio Informe da una serie de recomendaciones<sup>127</sup> para su estudio y ejecución por parte del Gobierno.

En estas recomendaciones, la Comisión comprende la existencia de dificultades políticas, sociales y económicas para la ejecución de estas recomendaciones que deben ser ejecutadas en un contexto de amplio consenso social y político. Aunque suponga un desempeño

---

<sup>127</sup> Comisión expertos para el Futuro del Valle, *op.cit.*, págs. 17-23.

económico importante, recomienda que se detenga su deterioro para establecer el Valle de los Caídos como un espacio de encuentro para todos los españoles, sin distinciones ideológicas.

Recomienda también reconvertir el Valle de los Caídos (originariamente se establece como espacio para honrar la memoria de los “caídos”) en un lugar para la memoria de todas las víctimas de la Guerra Civil.

Recomienda que se adopten medidas artísticas, sociales y de dignificación en varios espacios del Valle de los Caídos para lograr una resignificación integral de todo el conjunto.

En lo que respecta al nombre Valle de los Caídos, la Comisión recomienda que se mantenga el nombre actual ya que la resignificación no debe destruir sino de lo que existe explicar en su contexto.

Recomienda la creación de un Centro de Interpretación para que sea un espacio de memoria en el que se explique: la finalidad y el contexto socio-político en el que a cabo este conjunto, la simbología existente en dicho conjunto, se lleve un registro de las personas enterradas allí... todo ello a través de una investigación hecha por expertos, con exposiciones tanto fijas como temporales, así como la realización de cursos, talleres, actividades didácticas. A través de este Centro se investigue con la finalidad de divulgar y promover los valores constitucionales (dignidad, pluralismo, promoción de derechos, reparación) que conlleva la resignificación, así como la investigación sobre el conjunto entero llevada a cabo por instituciones académicas y acotada en el tiempo, la Comisión propone que este plazo sea de cinco años.

Respecto a la Basílica es competencia exclusiva de la Iglesia por lo que los religiosos no deben permitir actos políticos o de otra índole que no sean religiosos en su interior. Se debe hacer un esfuerzo económico para llevar a cabo obras de saneamiento de la Basílica. Además, destaca la importancia que tendría para el conjunto la creación de un nuevo Convenio entre la Administración y la Iglesia

Afirma que debido a que la identificación individualizada es una tarea casi imposible para la exhumación y la devolución de los restos a las familias debido a deterioro de los columbarios y de las criptas, es muy complicado la satisfacción de derecho moral a la recuperación de los restos de familiares.

Propone dignificar el cementerio a través de que siga un procedimiento homogéneo de recolocación de los restos en criptas nuevas con condiciones adecuadas a través de un proceso técnico y uniforme para el traslado, manipulación y custodia de los restos cumpliendo con los estándares internacionales en tratamiento de cadáveres. Una dignificación a través del respeto y recuerdo, intentando en la medida de lo posible, el reconocimiento e inscripción de las personas enterradas en este conjunto, eliminando de tal modo su anonimato y hacinamiento (respetando el derecho de las familias a mantener a sus familiares en el anonimato).

Respecto al enterramiento de Francisco Franco y de Primo de Rivera en el altar mayor de la Basílica, en el caso del primero, se debe actuar colaborando con la familia y con la Iglesia para sacar sus restos ya que no debe estar en tal sitio ya que contraviene la finalidad primitiva del monumento (se erigió como monumento para los caídos en la Guerra, hecho del que no fue víctima Franco) y respecto del segundo, se le entierre en otro lugar del Valle rompiendo así con su preeminencia y respetando por igual a todas las víctimas.

Considera que para que puedan llevarse a cabo estas recomendaciones se debe de instrumentalizar legalmente aspectos como, por un lado, la necesidad de un nuevo Convenio con la Iglesia (en este caso, con el Arzobispado de Madrid, Abadía de Silos e incluso con la Santa Sede) en los que quede claramente fijadas las obligaciones tanto religiosas y civiles sobre el conjunto del Valle de los Caídos, y por otro lado, que se convierta la Fundación en Real Patronato que conllevaría la estricta dependencia del conjunto a la Administración.

Por último, recomienda que se lleven a cabo varias reformas de conservación y mantenimiento urgentes, así como el traslado del Informe elaborado a los grupos parlamentarios para que de su estudio y análisis se puedan llegar a consensos para la implementación de las recomendaciones que el Informe recoge.

## V. CONCLUSIONES

**Primera.** - La Ley de Memoria Histórica 52/2007 fue un gran paso en España por la consecución de la memoria histórica y democrática tras lo ocurrido en la Guerra Civil y posteriormente, con la represión franquista. A pesar de ser un gran paso, se ha quedado obsoleta y su aplicación no ha sido del todo eficaz, ya que no impone ninguna obligación al Estado, sino que recoge un catálogo de derechos para las víctimas y los familiares.

**Segunda.** - Los Estados tienen el deber de recuperar la memoria democrática de un país tras periodos de graves violaciones de Derechos Humanos en sus territorios. Esta recuperación de la memoria democrática de un país se hace a través del aseguramiento de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. En el caso de España, se tendría que tener más en cuenta el Informe del Relator Especial de la ONU sobre estos aspectos.

**Tercera.** - En cuanto al derecho a la verdad, es un derecho absoluto, es decir, que no pueden existir razones (ni de orden pública ni de seguridad nacional) para que no se lleve a cabo su desarrollo.

**Cuarta.** - En España ayudaría a desarrollar este derecho a la verdad a través del crear un censo con todas las víctimas de la Guerra Civil y posterior, represión; educar desde la objetividad e imparcialidad las causas y las consecuencias que tuvo la dictadura franquista, así como la creación de una Comisión de la Verdad, cuyas funciones sean complementarias y no sustitutivas de los Tribunales ordinarios.

**Quinta.** - El derecho a la justicia al igual que ocurre con el derecho a la verdad no sólo es un derecho sino también un deber para el Estado, el cual tiene que garantizar la persecución de la impunidad de los graves delitos contra los Derechos Humanos ocurridos en tiempos no democráticos.

**Sexta.** - En España nos encontramos como obstáculo a este derecho/deber con la Ley de Amnistía. Esta Ley debe ser derogada ya que incumple con varios preceptos del Derecho Internacional Público. Se suele usar esta Ley para archivar e inadmitir querellas contra las torturas, genocidio, desapariciones forzosas ocurridas durante la Guerra Civil y en la posterior represión, si bien para que pueda existir una amnistía hace falta que se investiguen al menos los hechos, situación que no ocurre en España.

**Séptima.** – Otra forma de garantizar este derecho/deber es a través de la nulidad de las sentencias franquistas por motivos ideológicos, religiosos, orientación sexual...las cuales fueron dictadas sin ninguna garantía procesal. La nulidad de las sentencias supondría una forma de reparación para las víctimas y familiares por lo que también forma parte del derecho/deber a la reparación de quienes sufren las graves violaciones de Derechos Humanos.

**Octava.** – El derecho/deber a la reparación supone uno de los elementos fundamentales junto al derecho a la verdad y a la justicia de la Justicia Transicional. Es un derecho/deber que parte de lo imposible ya que es imposible volver a la situación anterior a la violación sufrida.

**Novena.** – Es necesario la redefinición del concepto de víctima para incluir dentro de este concepto a las víctimas y familiares de la Guerra Civil y de la represión. Así como también es necesario que desde el Estado se reconozca su responsabilidad y se pida disculpas oficialmente a todas las víctimas, familiares...

**Décima.** – Sobre la jurisdicción universal, hay que tener en cuenta las recomendaciones y principios que desde distintas organizaciones se plantean, ya que este principio supone un elemento fundamental en la lucha contra la impunidad en toda la Comunidad Internacional.

**Undécima.** – En el caso de España, las reformas de 2009 y 2014 supusieron una gran limitación al principio de jurisdicción universal, pasando de ser un país referente en la materia a ser uno de los más estrictos.

**Duodécima.** – España o investiga los crímenes del franquismo o debe dejar que la justicia argentina investigue y enjuicie a los responsables de las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas desde el año 1936 hasta 1977 en base al principio de jurisdicción universal.

**Decimotercera.** – En cuanto a la simbología, es necesario que se haga un estudio por parte de expertos independientes sobre cual es la mejor opción para la retirada, reforma o que se mantengan los símbolos franquistas individualmente bajo unos criterios homogéneos en base a la importancia histórica, social y cultural del propio símbolo.

**Decimocuarta.** – Sobre el Valle de los Caídos, es necesario que desde el Gobierno se sigan las recomendaciones dadas por la Comisión de expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos. Estas recomendaciones se tienen que llevar a cabo siempre desde el mayor consenso

posible por lo que es importante que exista un amplio diálogo responsable entre las distintas formaciones políticas lejos de intereses partidistas.

**Decimoquinta.** – Es necesaria la resignificación del Valle de los Caídos, explicando tanto las causas que llevaron a la situación que se produjo como las consecuencias, dotando a este conjunto de un simbolismo de reconciliación, recuerdo y memoria de todas las víctimas sin importar a que bando pertenecieron. Es necesario, a su vez, que se invierta en la reparación de muchos elementos estructurales, así como para la identificación y dignificación de los restos que en muchos casos se encuentran hacinados a efectos de dignificar a las víctimas enterradas allí.

**Decimosexta.** – Los restos del dictador, Francisco Franco, no pueden estar en el mismo lugar que sus víctimas ni dentro de un espacio de reconciliación y memoria, por lo que es necesario que desde el Gobierno se llegue a acuerdos con la familia para su exhumación y entierro en el lugar (no público) que quiera la familia. Los restos de José Antonio Primo de Rivera deben de ser trasladados a otro lugar del Valle de los Caídos a fin de lograr la igualdad de todas las víctimas enterradas allí.

## BIBLIOGRAFÍA

AFRICA LEGAL AID, The Cairo-Arusha Principles on Universal Jurisdiction in respect of Gross Human Rights Offences: An african perspective, 18-20 octubre de 2002.

[https://www.africalegalaid.com/download/policy\\_document/Policy\\_Document.pdf](https://www.africalegalaid.com/download/policy_document/Policy_Document.pdf)

AMBOS, Kai, “El marco jurídico de la justicia de transición” en AMBOS, Kay, MALARINO, Ezequiel y ELSNER, Gisela (eds.) *Justicia de transición. Informes de América Latina, Alemania, Italia y España*, Fundación Konrad-Adenauer, Montevideo, 2009

AMNISTÍA INTERNACIONAL, “*Análisis de Amnistía Internacional sobre la reforma de la jurisdicción universal en España tras la aprobación de la LO 1/2014*”, octubre de 2014

AMNISTÍA INTERNACIONAL, Verdad, justicia y Reparación: Creación de una Comisión de la verdad, 11 de junio de 2017

ARARTEKO (Defensor del Pueblo Vasco) “*Verdad, justicia y reparación para las víctimas de la dictadura franquista: Significado y políticas públicas en la Comunidad Autónoma del País Vasco*” Vitoria, enero 2012

ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU, Doc. A/56/677, Los principios de Princeton sobre la Jurisdicción Universal, de 4 de diciembre de 2001

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS ONU, Conjunto de Principios Actualizado para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad, Adición al Informe de Diane Orentlicher, experta independiente encargada de actualizar el Conjunto de Principios para la Lucha contra la Impunidad, Doc. ONU: E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 de febrero de 2005

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS Observación General núm. 20, art. 7 – Prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, (ONU: HRI/GEN/1/Rev.7), Ginebra, 1992

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observación General núm. 31: La índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Parte, (CCPR/C/21/Rev.1/Add.13), Ginebra, 2004



COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observaciones Finales: España, 2008, (CCPR/C/ESP/CO/5), Ginebra, 2008

CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS, *El Estado de Derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos*. Informe del Secretario General (UN Doc S/2004/616), 3 agosto de 2004

ESCUADERO ALDAY, Rafael “La Declaración de ilegitimidad de los tribunales franquistas: Una vía para la nulidad de sus sentencias” en *Derecho y Memoria Histórica*, ed. Trotta, Madrid, 2008

FIBGAR. Los Principios de Jurisdicción Universal Madrid-Buenos Aires, de 15 de septiembre de 2015 disponibles en:

<https://www.fibgar.org/upload/proyectos/35/es/principios-de-jurisdiccion-universal.pdf>

GIL, Alicia, *La justicia de transición en España. De la amnistía a la memoria histórica*, Atelier, Barcelona, 2009, pág.109

GÓMEZ ISA, Felipe, “El derecho de las víctimas a la reparación por violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos” en *El derecho a la memoria*, Ed. Alberdania, Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto, Bilbao, 2006

GÓMEZ ISA, Felipe “Retos de la justicia transicional en contextos no transicionales: el caso español”, en RIPOL CARULLA, Santiago y VILLÁN DURÁN, Carlos, *Justicia de transición: el caso de España*, Barcelona, Institut Català Internacional per la Pau, Barcelona, 2012

GREIFF, Pablo de, Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, (UN Doc A/HCR/27/56/ Add.1), Ginebra, 2014

Informe de la Comisión de expertos para el Futuro del Valle de los Caídos, 29 de noviembre de 2011. Disponible:

<http://www.memoriahistorica.gob.es/es-es/vallecaidos/Documents/InformeComisinExpertosValleCados.pdf>

Informe sobre los criterios generales Adoptados en los Acuerdos de la Comisión Técnica de Expertos de la Ley de Memoria Histórica, 16 de septiembre de 2011. Disponible:

[http://www.memoriahistorica.gob.es/es-es-vestigios/Documents/Criterios\\_Generales\\_Version\\_16092011MT.pdf](http://www.memoriahistorica.gob.es/es-es-vestigios/Documents/Criterios_Generales_Version_16092011MT.pdf)

JOINET, Louis, *Informe Final revisado acerca de la impunidad de los autores de violaciones de Derechos Humanos (civiles y políticos) de conformidad con la Resolución 1996/119 de la Subcomisión* (UN Doc E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1), 2 de octubre 1997

MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Aitor y VERGARA CÉSPEDES, Manuel Miguel, “*La jurisdicción universal como instrumento para la protección de pueblos indígenas: una guía práctica para defensores de derechos humanos*”, Fundación Internacional Baltasar Garzón, Copenhague, 2015

OLIVEIRA, Alicia y GUEMBE, María José, “La verdad, derecho de la sociedad” en *La aplicación de los tratados internacionales sobre derechos humanos por los tribunales locales*, Ed. Editores del Puerto, 2ª edición, Argentina, 1998

PAYERO LÓPEZ, Lucía, “Justicia de transición en España: claves para aprobar una asignatura pendiente” en *Revista de Paz y Conflictos*, Vol. 9, núm. 1, 2016

RANDALL, Kenneth C. “Universal jurisdiction under international law” en *Texas Law Review*, núm. 66, Texas, 1988

ROBLES CARRILLO, Margarita, “El principio de jurisdicción universal: Estado actual y perspectivas de evolución” en *Revista Española de Derecho Internacional*, Vol. 66, Madrid, julio-diciembre 2014.

SATZGER, Helmut, “*International and European Criminal Law*” Ed. C.H. Beck. Munich, 2012

VALENCIA, Hernando, “La ley española de amnistía de 1977 en una perspectiva de justicia transicional” en RIPOL, Santiago y VILLÁN, Carlos *Justicia de transición: el caso de España*, Institut Català Internacional per la Pau, Barcelona, 2012, pág. 196.

ZAZUETA CARRILLO, Laura Wendy, “El derecho a la verdad en el marco de la justicia transicional como obligación del Estado mexicano ante la impunidad” en *Revista Virtual Via Inveniendi et Iudicand*, Vol. 9, núm. 2, Universidad Santo Tomás, Bogotá, D. C., julio-diciembre 2014

## **ANEXO NORMATIVO Y JURIPRUDENCIAL**

### **NORMATIVA**

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Nueva York, 19 de diciembre de 1966

Constitución Española, 1978, *BOE*, núm. 311 de 29 de diciembre de 1978

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, *BOE*, núm. 281, de 24 de noviembre de 1995.

Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, *BOE*, núm. 157, 2 de julio de 1985.

Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, por lo que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, *BOE* núm. 266, de 4 de noviembre de 2009

Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal, *BOE* núm. 63, de 14 de marzo de 2014.

Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo. *BOE* núm. 77, de 31 de marzo de 2015

Constitución República Argentina, de 23 de agosto de 1994.

Ley 26.200 de 13 de diciembre de 2006 mediante la cual se implementa el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

Código de Derecho Canónico, Roma, 25 de enero de 1983

Orden CUL/459/2009, de 19 de febrero, por la que se crea y regula la Comisión Técnica de Expertos para la valoración de los supuestos determinantes de la excepcionalidad en la retirada de símbolos, *BOE*, núm. 51, 28 de febrero de 2009

Orden IRP/91/2010, de 18 de febrero, por la que se crea la Red de Espacios de Memoria Democrática de Cataluña. DOGC núm. 5576 de 26 de febrero de 2010.

Decreto 264/2011, de 2 de agosto, por el que se crean y regulan la figura de Lugar de Memoria Histórica de Andalucía y el Catálogo de Lugares de Memoria Histórica de Andalucía, *BOJA*, núm. 158, 12 de agosto de 2011,

Acuerdo de 20 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran catorce Lugares de Memoria Histórica de Andalucía, *BOJA*, núm. 63, 20 de marzo de 2012

Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, *BOJA*, núm. 63, 3 de abril de 2017

Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 30 de noviembre de 2016, por el que se da por enterado y ratifica el Censo provisional de símbolos franquistas y acepta las Recomendaciones para la retirada de dicha simbología, elaborados por la Comisión Técnica de Coordinación en materia de Memoria Histórica, *BON*, núm. 9, 13 de enero de 2017,

Ley Foral 16/2018, de 27 de junio, por la que se modifica la Ley Foral 33/2013, de 26 de noviembre, de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936, *BON*, núm. 134, 12 de julio de 2018.

Orden PRE/1396/2011, de 27 de mayo, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se crea la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos, *BOE*, núm. 127, 28 de mayo de 2011.

Decreto, 1 abril de 1940, disponiendo se alce Basílica, Monasterio y Cuartel de Juventudes, en la finca situada en la vertiente de la Sierra de Guadarrama (El Escorial), conocida como Cuelgamuros para preservar la memoria de los Caídos en nuestra Gloriosa Cruzada, *BOE*, núm. 93, 2 de abril de 1940.

Decreto-Ley, 23 de agosto de 1957, por el que se establece la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, *BOE*, núm. 226, 5 de septiembre de 1957

Real Decreto-ley 10/2018, de 24 de agosto, por el que se modifica la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Acuerdo del Consejo de Ministros de no continuación de procedimientos de extradición pasiva, Madrid, 13 de marzo de 2015. Texto completo:

(<http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2015/refc20150313.aspx#Argentina>)

### JURISPRUDENCIA

SCIDH, Caso Velásquez Rodríguez c. Honduras, 29 de julio de 1988

SCIDH Caso Bámaca Velásquez c. Guatemala, 25 de noviembre de 2000

SCIDH Caso Barrios Altos c. Perú, 14 de marzo de 2001

SCIDH Caso Myrna Mack Chang c. Guatemala, 25 de noviembre de 2003

STEDH Case Chauvy and others v. France, 29 September 2004

SCDIH, Caso Hermanas Serrano Cruz c. El Salvador, 1 de marzo 2005

SCIDH Caso Almonacid Arellano y otros c. Chile, 26 de septiembre de 2006

STEDH Case Monnet v. Switzerland, 21 September 2006

SCIDH Caso Zambrano Vélez y otros c. Ecuador, 4 de julio de 2007

Decision TEDH, Case Ould Dah v. France, 17 march 2009.

STEDH Case Kenedi v. Hungary, 26 May 2009

Auto del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal núm. 1 de Buenos Aires, Causa núm. 29.275 “NN s/ desestimación de denuncia y archivo” Expte. núm. 4.591/2010, de 5 de mayo de 2010

Decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala 2º, Causa núm. 29.275 “NN s/ desestimación de denuncia y archivo”, Expte. núm. 4.591/2010, de 3 de septiembre de 2010,

SCIDH caso Gomes Lund y otros c. Brasil, 24 de noviembre de 2010

Auto del Tribunal Supremo(ATS), Sala de lo Penal, 1º, núm. 3009/2012, 28 de marzo de 2012

Auto AN núm. 14/2014 Sala de lo Penal, Sección 2ª, 30 de abril de 2014

Circular de la Fiscalía General del Estado, de 30 de septiembre de 2016